

Máster en  
Abogacía



universidad de alicante

**FACULTAD DE DERECHO**

**MÁSTER EN ABOGACÍA**

**TRABAJO FIN DE MÁSTER**

**CURSO ACADÉMICO [2016-2017]**

TÍTULO:

**LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS  
HUMANOS SOBRE EL PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN**

AUTOR/A:

**Rafael Pastor Beneyto**

TUTOR/A ACADÉMICO/A:

**Carolina Soler García**

# Índice

Abreviaturas.....	4
Introducción.....	5
<b>CAPÍTULO I .....</b>	<b>8</b>
<b>LA REGULACIÓN DEL PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN .....</b>	<b>8</b>
1. Marco jurídico .....	8
1.1. El <i>non refoulement</i> a la luz del Convenio de Ginebra.....	8
1.1.1. Las personas beneficiarias de la prohibición de expulsión.....	9
1.1.2. Excepciones al principio de non refoulement .....	10
1.2. El principio de no devolución a la luz del CEDH .....	13
<b>CAPÍTULO II.....</b>	<b>19</b>
<b>PARÁMETROS EVALUADORES DEL RIESGO PROVENIENTE DEL</b>	
<b>ARTÍCULO 3 DEL CEDH.....</b>	<b>19</b>
1. La evaluación del riesgo .....	19
1.1. El riesgo proveniente de agentes particulares.....	19
1.2. El riesgo proveniente de un conflicto genérico .....	20
2. La carga de la prueba.....	22
<b>CAPÍTULO III .....</b>	<b>24</b>
<b>EL ALCANCE DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 DEL CEDH.....</b>	<b>24</b>
1. El principio de no devolución en relación a cuestiones sanitarias .....	24
2. La extraterritorialidad en la aplicación del principio de no devolución por parte del TEDH .....	27
3. La devolución indirecta .....	29
4. La aplicación del artículo 3 del CEDH en relación con otros derechos salvaguardados por el Convenio.....	32
4.1. El derecho a la vida .....	32
4.1.1. Regulación internacional del derecho a la vida.....	32
4.1.2. La constatación de la vulneración del derecho a la vida por el TEDH ....	33
4.2. El derecho a la tutela judicial efectiva.....	35
4.2.1. Regulación internacional del derecho a la tutela judicial efectiva .....	35
4.2.2. La naturaleza flagrante de la denegación de justicia .....	36

<b>CAPÍTULO IV.....</b>	<b>37</b>
<b>LAS MEDIDAS CAUTELARES .....</b>	<b>37</b>
1. El ámbito de aplicación de la Regla 39 del Reglamento del TEDH.....	37
2. La carga de la prueba.....	41
3. El procedimiento a seguir por el TEDH .....	42
4. Acerca de la obligatoriedad de las medidas provisionales .....	43
 <b>CAPÍTULO V .....</b>	 <b>45</b>
<b>ALTERNATIVAS A LA PERMANENCIA DEL NACIONAL DE UN TERCER PAÍS EN EL ESTADO MIEMBRO .....</b>	<b>45</b>
1. La devolución a un Estado seguro .....	45
2. La denominada <i>internal flight solution</i> o alternativa de reubicación interna .....	50
3. Las garantías diplomáticas.....	54
 Conclusiones.....	 62
Bibliografía.....	66

## **Abreviaturas**

ACNUR	Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
CDI	Comisión de Derecho Internacional
CEDH	Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales
CICR	Comité Internacional de la Cruz Roja
CIDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos
DUDH	Declaración Universal de Derechos Humanos
EASO	Oficina Europea de Apoyo al Asilo
EEMM	Estados Miembros
EEUU	Estados Unidos de América
PIDCP	Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
SEAE	Servicio Europeo de Acción Exterior
STEDH	Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
STJUE	Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TEDH	Tribunal Europeo de Derechos Humanos
TFUE	Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TPIY	Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia
UE	Unión Europea

## Introducción

Según cifras de ACNUR, el número de personas desplazadas en busca de protección internacional en todo el mundo alcanzó la cifra de 65,6 millones el pasado año 2016<sup>1</sup>. De estos 65,6 millones de personas desplazadas de forma forzosa, 22,5 millones eran refugiados, 40,3 millones desplazados internos y 2,8 millones solicitantes de asilo. Las cruentas guerras en Siria e Iraq son las grandes impulsoras de este exponencial movimiento migratorio. Pero también, la violencia en Afganistán y Sudán del Sur, los incesantes conflictos en Eritrea o la pobreza en Kosovo son, entre otros factores, los responsables del drástico incremento en el número de desplazamientos forzados<sup>2</sup>.

Es precisamente la gestión de los flujos migratorios el gran reto al que se enfrentan hogaño la mayoría de los Estados y la comunidad internacional en su conjunto<sup>3</sup>. Resulta indubitable la potestad de cada país para establecer las condiciones de entrada y permanencia de los nacionales de terceros Estados en su propio territorio, así como el derecho de un Estado a expulsar a un extranjero, aunque, como es lógico, no se trata de un derecho absoluto. La cuestión que hay que plantearse para dilucidar cuál es el alcance de la facultad de expulsar es la concerniente a los límites aplicables al derecho de expulsión. Para responder a esta pregunta cabe distinguir dos elementos. El primero de ellos es el relativo a la naturaleza intrínseca del ordenamiento jurídico internacional que obliga a que toda norma o principio del Derecho Internacional coexista con los principios básicos de ese ordenamiento. El segundo elemento hace alusión a los principios que deben respetarse en el ejercicio del derecho de expulsión. Estos principios constituyen un conjunto de normas de carácter derivado al emanar del

---

<sup>1</sup> ACNUR. *Tendencias globales: desplazamiento forzado en 2016*, 19 de junio de 2017. Disponible en la siguiente dirección electrónica: <http://www.acnur.es/PDF/Tendencias2016.pdf>, p. 5 (el último acceso a los enlaces adjuntos a lo largo del presente trabajo fue el día 12 de septiembre de 2017).

<sup>2</sup> ACNUR. *Tendencias Globales sobre refugiados y otras personas de interés del ACNUR*, 19 de junio de 2017. Disponible en la siguiente dirección electrónica: <http://www.acnur.org/recursos/estadisticas/>

<sup>3</sup> BOLLO AROCENA, M.D. *Expulsión de extranjeros, derecho internacional y derecho europeo*. Madrid: Aranzadi Instituciones, 2017, p. 18.

ordenamiento jurídico y adquieren la forma de normas generales o normas establecidas por los sujetos del Derecho Internacional<sup>4</sup>.

En contraposición a la teoría tradicional según la cual la facultad de expulsión, corolario de la soberanía estatal, se aplicaba de forma totalmente discrecional, en el contexto actual, el derecho de expulsión de un Estado está limitado por esos principios fundamentales que forman el ordenamiento jurídico internacional, tales como el principio de *pacta sunt servanda* y la obligación de respetar el *jus cogens*. Estos principios pueden, a su vez, dividirse en tres tipos de límites: el primero de ellos, en relación con las personas que son objeto de la devolución (*ratione personae*); el segundo de ellos, en relación con los derechos que pueden vulnerarse con motivo de la expulsión (*ratione materiae*) y, en último término, los límites en relación con el procedimiento seguido (*ratione procedendi*)<sup>5</sup>.

El objeto de estudio de este trabajo se centra en el análisis que el TEDH ha realizado sobre el artículo 3 del CEDH<sup>6</sup>, el cual establece la prohibición por parte de los Estados parte de realizar actos de tortura o tratos inhumanos o degradantes. Respecto al alcance del mismo, el TEDH ha desarrollado, a la luz de este precepto, una jurisprudencia que establece un principio de no devolución, conforme al cual, ningún Estado parte podrá enviar a un nacional de un tercer Estado a un país en el que corra el riesgo de sufrir alguno de estos daños. A efectos de facilitar una mayor comprensión del lector, se aludirá al término *non refoulement* para referirse a la protección conferida por el Convenio de Ginebra de 1951 y al término de no devolución en el sentido de la práctica desarrollada por el TEDH de conformidad con el art. 3 del CEDH.

El trabajo se articula del siguiente modo: tras una breve introducción, en el Capítulo I se analiza el marco jurídico del principio de no devolución, tanto en el sentido del meritado Convenio de Ginebra de 1951, como a la luz del CEDH;

---

<sup>4</sup> Informe preliminar sobre la expulsión de extranjeros, del Sr. Maurice Kamto, Relator Especial, A/CN.4/554, 4 de abril de 2005, pp. 5-6. Vid. también Tercer informe sobre la expulsión de extranjeros, del Sr. Maurice Kamto, Relator Especial, A/CN.4/581, 19 de abril de 2007, p. 7.

<sup>5</sup> Ibídem, pp. 8-9.

<sup>6</sup> Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, Roma, 4 de noviembre de 1950.

seguidamente, en el Capítulo II, se abordan los parámetros evaluadores del riesgo proveniente del artículo 3 del CEDH; en el Capítulo III se analiza el alcance de la aplicación del artículo 3 del CEDH y su relación con otros derechos salvaguardados por el Convenio; a continuación, en el Capítulo IV se aborda la cuestión relativa a las medidas cautelares que, en determinadas ocasiones, adopta el TEDH para garantizar el desarrollo del proceso judicial; en el Capítulo V, se analiza la cuestión relativa a las alternativas a la permanencia del nacional de un tercer país en el Estado miembro, en concreto: la devolución a un Estado seguro, la denominada *internal flight solution* o reubicación interna y las garantías diplomáticas; seguidamente, se acompañan unas conclusiones finales y la bibliografía.

## CAPÍTULO I

### LA REGULACIÓN DEL PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN

#### 1. Marco jurídico

##### 1.1. El *non refoulement* a la luz del Convenio de Ginebra

El principio de *non refoulement* es una norma de Derecho Internacional general de carácter *erga omnes*<sup>7</sup> en cuya virtud todo aquel que corra el peligro de ser perseguido en su respectiva nación de origen, goza del derecho fundamental a pedir protección en otro Estado, así como a no ser devuelto al país de persecución en donde de forma previsible corra un riesgo de ser sometido a ejecución sumaria o extrajudicial, o a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Este principio está consagrado en el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, con el siguiente tenor literal:

“1. Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas.

2. Sin embargo, no podrá invocar los beneficios de la presente disposición el refugiado que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra, o que, habiendo sido objeto de una condena definitiva por un delito particularmente grave, constituya una amenaza para la comunidad de tal país”.

---

<sup>7</sup> CONDE PÉREZ, E. *TEDH- Sentencia de 28.02.2008, Saadi c. Italia, 37201/06- Artículo 3 CEDH prohibición de torturas y penas o tratos inhumanos o degradantes- terrorismo v. tortura*. Madrid: Revista de Derecho Comunitario Europeo, 2009, p. 276. También en STEDH (Gran Sala) de 21 de noviembre de 2001. *Asunto Al-Adsani c. Reino Unido*, demanda no. 35763/97, par. 151; STEDH (Sección 4ª) de 17 de enero de 2012. *Asunto Othman (Abu Qatada) c. Reino Unido*, demanda no. 8139/09, pars. 253 y 266; STEDH (Sección 3ª) de 20 de julio de 2010. *Asunto A. c. Holanda*, demanda no. 4900/06, pars. 133 y 137: “The rule had arguably also attained the status of *ius cogens*, meaning that it had become a peremptory, non-derogable norm of international law”.



Igualmente, el principio de no devolución también ha sido regulado por diversos textos normativos internacionales posteriores, tanto a nivel universal como a nivel regional europeo, verbigracia por el artículo 3 de la Declaración de Naciones Unidas sobre el asilo territorial adoptada en 1967<sup>8</sup>, por las conclusiones del Comité Ejecutivo del ACNUR y, fuera del marco de protección de los refugiados, por el artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984<sup>9</sup> o como consecuencia de la jurisprudencia desarrollada por el TEDH a la luz del artículo 3 del CEDH. En base a esta jurisprudencia, los Estados parte no podrán enviar a un nacional de un tercer Estado a un país en el que corra el riesgo de sufrir tratos prosritos por el citado artículo 3 del Convenio. Por ende, el principio de no devolución rebasa el ámbito de protección de los refugiados<sup>10</sup>.

### **1.1.1. Las personas beneficiarias de la prohibición de expulsión**

La obligación del país de acogida en relación al principio de *non refoulement*, establecido en el artículo 33 de la Convención de Ginebra de 1951, se aplica a las personas que han sido reconocidas oficialmente como refugiadas por las autoridades de ese Estado, pero también son beneficiarios de tal protección los solicitantes de asilo que se hallan a la espera de la resolución de su petición planteada<sup>11</sup>. En este sentido, la estancia del solicitante de asilo debe considerarse como regular, al menos de forma temporal, mientras se examina su solicitud presentada, con la finalidad de evitar su expulsión<sup>12</sup>.

---

<sup>8</sup> Naciones Unidas. *Declaración sobre el Asilo Territorial*, de 14 de diciembre de 1967, AG. Resolución 2132 (XXII).

<sup>9</sup> Naciones Unidas. *Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes*, Nueva York, 10 de diciembre de 1984, AG. Resolución 39/46.

<sup>10</sup> BOLLO AROCENA, M.D. *Expulsión de extranjeros, derecho internacional y derecho europeo*, op. cit., p. 32.

<sup>11</sup> ACNUR. *Sección de Operaciones de Protección y Asesoría Legal. División de Servicios de Protección Internacional. Nota del ACNUR sobre las garantías diplomáticas y la protección internacional de los refugiados*. Ginebra, agosto de 2006. Disponible en la siguiente dirección electrónica: [www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7130.pdf?view=1](http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7130.pdf?view=1), p. 15. También en HATHAWAY, J.C., *The Rights of Refugees under International Law*, Cambridge University Press, 2005, p. 667.

<sup>12</sup> Vid. Unión Europea. Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (refundición). *DOUE*, L 180/60, de 29 de junio de 2013. Esta directiva establece que los solicitantes de

En definitiva, la protección conferida por el principio de *non refoulement* se aplica a todos los refugiados con independencia de su reconocimiento oficial por las autoridades con base a los requerimientos de la Convención de 1951 o la legislación nacional. Así pues, este derecho ampara a solicitantes de asilo cuya condición aún no ha sido reconocida de forma oficial. De manera igual, se hallan protegidos por el principio de no devolución los solicitantes de asilo en frontera<sup>13</sup> e incluso en Alta mar, cuando el Estado ejerza una situación *de jure o de facto* de su jurisdicción<sup>14</sup>. De otro modo, no se entendería que un solicitante de asilo, cuya petición todavía no ha sido examinada, fuera devuelto al país en que esté expuesto al riesgo de ser perseguido.

### 1.1.2. Excepciones al principio de *non refoulement*

El principio de *non refoulement* establece, en el artículo 33 de la Convención de Ginebra, dos excepciones a la prohibición de expulsión de un refugiado: por un lado, la existencia de razones fundadas para considerar que la persona refugiada representa *un peligro para la seguridad del país donde se encuentra*; y, por otro lado, la existencia de una *condena definitiva* por la comisión de un *delito particularmente grave* que convierta a esa persona en una amenaza para la comunidad del país. Ahora bien, tal y como señaló ACNUR, estas excepciones solamente pueden tener cabida cuando la expulsión o devolución de la persona sea la única forma posible de proteger los intereses legítimos de los países<sup>15</sup>. Así pues, para poder aplicar la excepción de *seguridad del país* al principio de no devolución, se necesita disponer de una prueba individualizada de que el refugiado representa un peligro real en la actualidad o en el futuro para el Estado de acogida<sup>16</sup>. Por su parte, la excepción de la amenaza para la

---

asilo estarán autorizados a permanecer en el Estado miembro, únicamente a efectos del procedimiento, hasta que la autoridad decisoria haya dictado una resolución conforme a los términos establecidos en la propia Directiva.

<sup>13</sup> CIDH. *Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional*, Opinión Consultiva, OC-21/14, 19 de agosto de 2014, par. 210.

<sup>14</sup> STEDH (Gran Sala) de 23 de febrero de 2012. *Asunto Hirsi Jamaa y otros c. Italia*, demanda no. 27765/09, par. 81.

<sup>15</sup> ACNUR. *Note on Expulsion of Refugees EC/SCP/3*. Disponible en la siguiente dirección electrónica: <http://www.unhcr.org/excom/scip/3ae68cbf14/note-expulsion-refugees.html>

<sup>16</sup> ACNUR. *Sección de Operaciones de Protección y Asesoría Legal. División de Servicios de Protección Internacional. Nota del ACNUR sobre las garantías diplomáticas y la protección internacional de los refugiados*, op.cit., p. 6. Cfr. también A. GRAHL-MADSEN. *Commentary on the Refugee Convention 1951 articles 2-11, 13-37 Published by the Division of International Protection of the United Nations*

comunidad podrá aplicarse cuando el refugiado haya sido objeto de una condena por un *delito particularmente grave* y, a mayor abundamiento, se deberá examinar en vista del delito y la condena de la persona en cuestión, si la misma representa un peligro para la comunidad del Estado de acogida. No es baladí señalar que el hecho de que la persona haya sido condenada por un delito particularmente grave no supone *per se* que esa persona represente una amenaza para la comunidad, sino que dependerá de las circunstancias y de la naturaleza del delito, así como de otros elementos sustanciales, tales como la inminencia del peligro o la probabilidad de reincidencia.

La seguridad pública amenazada comprende tanto la seguridad interior de un Estado miembro como su seguridad exterior y, por consiguiente, puede afectar a la seguridad pública el hecho de poner en peligro el funcionamiento de las instituciones y de los servicios públicos básicos, a la supervivencia de la población, o también puede conllevar un riesgo para la seguridad pública el hecho de perturbar gravemente las relaciones exteriores o la coexistencia pacífica de los pueblos, así como la amenaza a los intereses militares<sup>17</sup>. Por ende, deben existir razones fundadas de que el riesgo para la comunidad del país es real. En la misma línea, como se ha afirmado, la amenaza ha de ser presente o futura, no pasada y, la amenaza debe serlo para el país en el que el refugiado se encuentra, no para cualquier otro Estado<sup>18</sup>. Por ello, la deportación de un refugiado en aplicación de alguna de las excepciones previstas en el meritado artículo 33 únicamente será legal si es necesaria y proporcionada. Para ello, debe existir una relación racional entre la devolución de la persona y la supresión del riesgo que sufre la comunidad del país de acogida. Como declaró ACNUR, “la devolución deberá ser el último recurso para eliminar el peligro a la seguridad del país de acogida o a su

---

*High Commissioner for Refugees 1997*, par. 8: “Generally speaking, the ‘security of the country’ exception may be invoked against acts of a rather serious nature , endangering directly or indirectly the constitution , government, the territorial integrity, the independence, or the external peace of the country concerned”.

<sup>17</sup> STJUE (Gran Sala) de 15 de febrero de 2016. *J. N. c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, demanda no. C-601/15, par. 66, en alusión al precepto 8, apartado 3, letra e) de la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013 por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional.

<sup>18</sup> WOUTERS, C.K. *International Legal Standards for the Protection from Refoulement: a legal analysis of the prohibitions on refoulement contained in the Refugee Convention, the European Convention on Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention against Torture*, Antwerpen: Intersentia, 2009, p. 115. Disponible en la siguiente dirección electrónica: <https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/13756/000-wouters-B-25-022009.pdf?sequence=2>

comunidad”<sup>19</sup>, debiendo ser mayor el riesgo que podría correr el país de acogida con su presencia que el daño a la persona como consecuencia de su expulsión.

El principio de *non refoulement* es una consecuencia o corolario de la obligación de los Estados de precaver las infracciones de los derechos fundamentales de todo individuo. Como afirma Mariño Menéndez, “la determinación de estos derechos básicos, en ausencia de una categorización normativa expresa de los mismos a través de convenciones internacionales de alcance universal, puede realizarse acudiendo a la noción de *estándar mínimo* universal de derechos humanos”<sup>20</sup>. Los derechos que forman parte de ese meritado estándar mínimo se encuentran protegidos por normas imperativas de Derecho Internacional general y, de ese modo, su contenido no puede ser objeto de modificación, salvo que la misma se lleve a cabo por una norma de su misma naturaleza, tal y como se colige del artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados<sup>21</sup>. Son normas protectoras inderogables de carácter *ius cogens*<sup>22</sup> y, los derechos en cuestión deben ser respetados no sólo en tiempos de paz, sino también en situaciones excepcionales (guerra u otro peligro público que amenace la nación)<sup>23</sup>. Así se establece en el artículo 4 del PIDCP y el artículo 15 del CEDH. En esta línea, se puede afirmar que los valores fundamentales que protegen los derechos humanos del estándar universal son la vida, la integridad física y moral, así como la seguridad jurídica de las personas. Por ello, los derechos del estándar mínimo son el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el derecho a un proceso debido en que quepa la

---

<sup>19</sup> ACNUR. *Sección de Operaciones de Protección y Asesoría Legal. División de Servicios de Protección Internacional. Nota del ACNUR sobre las garantías diplomáticas y la protección internacional de los refugiados*, op.cit., p. 13.

<sup>20</sup> MARIÑO MENÉNDEZ, F. *El asilo en el Derecho de la Unión Europea*. Madrid: Aranzadi Instituciones, 2017, p.7.

<sup>21</sup> *Ibidem*, p. 8.

<sup>22</sup> STPIY de 16 de noviembre de 1998. *Asunto Furundzija*, caso N° IT-95-17/1-T, pars. 134-164; STEDH (Gran Sala) de 21 de noviembre de 2001. *Asunto Al-Adsani c. Reino Unido*, demanda no. 35763/97, par. 61; *Othman (Abu Qatada) c. Reino Unido*, op. cit., par.266.

<sup>23</sup> *Vid.* STEDH (Gran Sala) de 7 de julio de 1989. *Asunto Soering c. Reino Unido*, demanda no. 14038/88, par. 88; STEDH (Gran Sala) de 28 de octubre de 1998. *Asunto Assenov y otros c. Bulgaria*, demanda no.24760/94, par. 93; STEDH (Gran Sala) de 18 de diciembre de 1996. *Asunto Aksoy c. Turquía*, demanda no. 21987/93, par. 62; STEDH (Gran Sala) de 15 de noviembre de 1996. *Asunto Chahal c. Reino Unido*, demanda no. 22414/93, par. 79; STEDH (Gran Sala) de 28 de septiembre de 2015. *Asunto Bouyid c. Bélgica*, demanda no. 23380/09, par. 81; STEDH (Gran Sala) de 6 de abril de 2000. *Asunto Labita c. Italia*, demanda no. 26772/95, par. 119.

posibilidad de interponer un recurso efectivo para defender los derechos precitados. Aunque el riesgo de vulneración de la prohibición de tortura es el caso más habitual en la aplicación del principio de *non refoulement*, esta norma también actúa frente a las vulneraciones del derecho a un proceso con todas las garantías y frente a violaciones del derecho a la vida<sup>24</sup>, como se analiza en el Capítulo III.

## 1.2. El principio de no devolución a la luz del CEDH

El Derecho Internacional de derechos humanos ha determinado que el principio de no devolución es el componente fundamental de la prohibición absoluta de la tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes<sup>25</sup>. Este derecho a no ser sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se encuentra reconocido en diversos convenios internacionales de protección de los derechos humanos. Entre ellos, cabe citar el artículo 3 del CEDH, el 5 de la DUDH o el 7 del PIDCP. Por añadidura, la tortura también se encuentra proscrita en normas específicas, tales como el Convenio de Naciones Unidas contra la Tortura de 1984<sup>26</sup> o el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes de 1987<sup>27</sup>. Se trata de un derecho absoluto e inderogable, tal y como se colige de las precitadas normas, en concreto, del artículo 15.2 del CEDH o el 4.2 del PIDCP y de la práctica de los diversos órganos de control. Este carácter absoluto e inderogable de la prohibición de tortura es reiterado por el TEDH en la Sentencia dictada en el caso *Daoudi c. Francia* con independencia de las actuaciones realizadas por la persona en cuestión, “por muy indeseables y peligrosas que éstas sean”<sup>28</sup>.

La calificación de trato inhumano o degradante ha sido desarrollada por la doctrina jurisprudencial del TEDH. A tal efecto, se define como aquel que es infligido

---

<sup>24</sup> SÁNCHEZ LEGIDO, A. *Garantías diplomáticas, no devolución y prohibición de la tortura*. Disponible en la siguiente dirección electrónica: [https://previa.uclm.es/profesorado/asanchez/webdih/.../REDI-Garantías\\_txt.doc](https://previa.uclm.es/profesorado/asanchez/webdih/.../REDI-Garantías_txt.doc), p. 6.

<sup>25</sup> Naciones Unidas. Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado. Nota sobre protección Internacional, 13 de septiembre de 2001, A/AC.96/951, p. 6.

<sup>26</sup> Naciones Unidas. *Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes*, op. cit.

<sup>27</sup> Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, 26 de noviembre de 1987, ETS n.º. 126.

<sup>28</sup> STEDH (Sección 5ª) de 3 de diciembre de 2009. *Asunto Daoudi c. Francia*, demanda no. 19576/08, par. 64.

“con premeditación durante horas y que causa lesiones corporales y gran sufrimiento físico o mental”<sup>29</sup>. Del mismo modo, se considera que un trato es degradante si humilla o desprecia a un individuo, si disminuye su dignidad humana o suscita en la persona sentimientos de miedo, angustia o inferioridad en aras de minar su resistencia moral y física<sup>30</sup>. No es necesario que la humillación lo sea a ojos de los demás sino que basta con que la víctima se sienta humillada ante sus propios ojos<sup>31</sup>. Por su parte, pese a la conveniencia de considerar la cuestión de si el objetivo o la intencionalidad es humillar o rebajar a la víctima, la ausencia de tal propósito no puede excluir de manera concluyente la constatación de la violación del artículo 3 de la Convención de Roma de 1950<sup>32</sup>.

Es evidente que las autoridades de un Estado no pueden infligir contra las personas que se hallen en su territorio ningún tipo de tortura o trato cruel, inhumano o degradante, empero tampoco pueden exponer a nadie que se halle bajo su jurisdicción al riesgo de sufrir o estar expuesto a tales actos en el país de destino, como consecuencia de su devolución, expulsión o extradición<sup>33</sup>. Los Estados contratantes están obligados a respetar las obligaciones asumidas en virtud del Convenio sobre cualquier otra

---

<sup>29</sup> STEDH (Gran Sala) de 21 de enero de 2011. *Asunto M.S.S. c. Bélgica y Grecia*, demanda no. 30696/09, par. 220.

<sup>30</sup> STEDH (Sección 4ª) de 29 de abril de 2002. *Asunto Pretty c. Reino Unido*, demanda no. 2346/02, par. 52; STEDH (Sección 3ª) de 10 de julio de 2001. *Asunto Price c. Reino Unido*, demanda no. 33394/96, pars. 24-30; STEDH (Sección 3ª) de 24 de julio de 2001. *Asunto Valašinas c. Lituania*, demanda no. 44558/98, par. 117; STEDH (Sección 3ª) de 6 de febrero de 2001. *Asunto Bensaid c. Reino Unido*, demanda no. 44599/98, par. 63.

<sup>31</sup> STEDH (Gran Sala) de 25 de abril de 1978. *Asunto Tyrer c. Reino Unido*, demanda no. 5856/72, par. 32: “it may well suffice that the victim is humiliated in his own eyes, even if not in the eyes of others”.

<sup>32</sup> STEDH (Sección 2ª) de 19 de abril de 2001. *Asunto Peers c. Grecia*, demanda no. 28524/95, par. 74: “In the light of the foregoing, the Court considers that in the present case there is no evidence that there was a positive intention of humiliating or debasing the applicant. However, the Court notes that, although the question whether the purpose of the treatment was to humiliate or debase the victim is a factor to be taken into account, the absence of any such purpose cannot conclusively rule out a finding of violation of Article 3”.

<sup>33</sup> Opinión Consultiva sobre la aplicación extraterritorial de las obligaciones de no devolución en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, par. 22: “En concordancia con las obligaciones mencionadas anteriormente, antes de aplicar cualquier medida de deportación, los Estados tienen el deber de establecer que la persona a quien pretenden deportar de su territorio o jurisdicción no quedará expuesta al peligro de graves violaciones a sus derechos humanos como las mencionadas arriba. De existir tal peligro, el Estado debe descartar la expulsión forzosa de la persona en cuestión”.

obligación derivada, a título de ejemplo, de un acuerdo bilateral<sup>34</sup>. De no proceder de ese modo, el Estado que devuelve a la persona al país requirente sería responsable, como cómplice, de los actos de tortura que en el mismo pudieran ejecutarse contra la persona en cuestión<sup>35</sup>.

En este sentido, en la STEDH de 7 de julio de 1989, *Soering c. Reino Unido*, el Tribunal concluyó que la entrega en extradición de Jens Soering, reo de asesinato, a EEUU, infringiría la prohibición de tortura del artículo 3 del CEDH pues, aunque la pena capital no supone, por sí misma, un trato inhumano o degradante proscrito por el Convenio, las circunstancias que acompañan a la pena de muerte pueden, en ciertas ocasiones, incluirse en el ámbito de aplicación del precepto<sup>36</sup>. Así las cosas, el Tribunal determinó que la extradición podría comprometer la responsabilidad de Reino Unido en virtud del CEDH, al existir motivos serios y comprobados de que el interesado correría un riesgo real de ser sometido a tortura en el supuesto de ser entregado a EEUU.

En relación a lo expuesto, debe darse relevancia al hecho de que la doctrina sentada en la STEDH *Soering* (cit.) ha sido reiterada por otra jurisprudencia posterior. En efecto, en la STEDH asunto *Cruz Varas y otros c. Suecia* de 20 de marzo de 1991<sup>37</sup> se afirma que la decisión de un Estado contratante de extraditar o expulsar a un fugitivo puede plantear problemas en relación con el artículo 3 del CEDH cuando existan motivos serios y comprobados para estimar que el interesado corre un riesgo real de ser sometido a tortura o a penas o tratos inhumanos o degradantes en el Estado receptor. En

---

<sup>34</sup> STEDH (Sección 4ª) de 2 de marzo de 2010. *Asunto Al-Saadoon y Mufdhi c. Reino Unido*, demanda no. 61498/08, par. 138.

<sup>35</sup> *Ibíd.*, par. 128.

<sup>36</sup> *Soering c. Reino Unido*, *op. cit.*, par. 91. El demandante de nacionalidad alemana, Jens Soering, fue detenido en Inglaterra en abril de 1986 por delito de estafa. El 13 de junio de ese mismo año, Soering y su pareja Elisabeth Haysom, de nacionalidad canadiense, fueron acusados por el “gran jurado” del Tribunal de distrito del Condado de Bedford de Virginia (EEUU) de haber asesinado a los padres de ella en marzo de 1985, de modo que el Gobierno americano solicitó la extradición de ambos en agosto de 1986, en cumplimiento del Tratado anglo-americano sobre extradición de 8 de junio de 1972. El demandante, ante la negativa de las autoridades británicas a denegar la petición estadounidense de extradición, recurrió a la Comisión Europea de Derechos Humanos el 8 de julio de 1988 esgrimiendo que, ante la falta de garantías acerca de la no ejecución de la condena de muerte que su extradición a Estados Unidos podría comportar y la consecuente estancia en el denominado “corredor de la muerte”, su entrega en extradición violaría la prohibición contenida en el art. 3 del CEDH.

<sup>37</sup> STEDH (Gran Sala) de 20 de marzo de 1991. *Asunto Cruz Varas y otros c. Suecia*, demanda no. 15576/89.

consecuencia, el Estado contratante puede incurrir en responsabilidad por un acto cuyo resultado directo consista en exponer a alguien a dicho peligro<sup>38</sup>. También vuelve a ser reiterado el principio *Soering* en la STEDH *Vilvarajah y otros c. Reino Unido* de 30 de octubre de 1991<sup>39</sup>.

El TEDH ha manifestado de forma reiterada el carácter inquebrantable de la norma que prohíbe la comisión de actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, en el contexto de la extradición, expulsión o devolución. En este sentido, no puede justificarse la expulsión o devolución de un individuo por razones de seguridad nacional u orden público si la persona devuelta pudiera ser expuesta a un riesgo real de sufrir tortura u otros tratos inhumanos o degradantes en el país receptor. Un ejemplo paradigmático es la mentada STEDH dictada en el caso *Daoudi c. Francia*, en la que el Tribunal concluyó que la ejecución de la decisión de expulsar al Sr. Daoudi – acusado de pertenecer a una organización terrorista - a Argelia podría constituir una violación del artículo 3 del CEDH. En la misma línea, la STEDH dictada en el marco del caso *Sellem c. Italia*<sup>40</sup> determinó que la devolución del Sr. Sellem, igualmente acusado de pertenecer a banda terrorista, a Túnez vulneraría el artículo 3 de la CEDH pues la expulsión le pondría en riesgo de sufrir actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes proscritos por el Convenio.

La devolución de una persona no nacional, sospechosa de haber cometido o poder cometer en el futuro actos terroristas, puede constituir una infracción del artículo 3 del CEDH si la expulsión puede ponerle en situación de exposición a un grave riesgo de sufrir tortura u otros tratos inhumanos o degradantes en el país de destino. Así pues,

---

<sup>38</sup> No obstante, en *Cruz Varas y otros c. Suecia* (cit.) el Tribunal concluyó que no existían motivos serios y fundados para pensar que la devolución a Chile del demandante Cruz Varas podría conllevar un riesgo real de sufrir tratos inhumanos o degradantes. Asimismo, la mejoría de la situación política en Chile y la circunstancia de que la decisión final de expulsar al actor fuere estudiada exhaustivamente fueron factores determinantes para concluir que la expulsión del demandante en esta Litis no rebasara el umbral establecido por el artículo 3, puesto que no había elementos de prueba veraces que justificaran sus temores.

<sup>39</sup> STEDH (Gran Sala) de 30 de octubre de 1991. *Asunto Vilvarajah y otros c. Reino Unido*, demanda no. 13163/87; 13164/87; 13165/87; 13447/87; 13448/87.

<sup>40</sup> STEDH (Sección 2ª) de 5 de mayo de 2009. *Asunto Sellem c. Italia*, demanda no. 12584/09.



en la STEDH *N. c. Finlandia*<sup>41</sup> el Tribunal recordó que la no expulsión o no devolución de un individuo, inclusive bajo la presunción de haber cometido actos terroristas, es un principio fundamental de la protección de los derechos humanos, extendiendo la aplicación del *non refoulement*, circunscrito al derecho internacional de los refugiados. En dicho asunto, el TEDH concluyó que la devolución del Sr. N, sospechoso de haber cometido ilícitos en Finlandia, a la República Democrática del Congo, le expondría al riesgo de sufrir torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes al constatar que la persona formaba parte del grupo más íntimo de colaboradores del depuesto presidente congoleño Mobutu Sese. Por lo tanto, cuando se hayan demostrado razones sustanciales para determinar que un individuo enfrentaría un riesgo previsible, cierto y real de ser sometido a tratos proscritos por el artículo 3 del CEDH en caso de ser expulsado a otro Estado, la responsabilidad del Estado contratante se encuentra comprometida en caso de realizarse la expulsión. Así, en dichas circunstancias, las actividades de la persona en cuestión, por indeseables y peligrosas que resulten, no pueden ser una consideración material<sup>42</sup>.

Como ha manifestado en reiteradas ocasiones el Tribunal de Estrasburgo, la protección derivada del principio de no devolución concurriendo riesgo de tortura es más amplia que la que deriva del *non refoulement* en caso de persecución por motivo de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. Así es, la naturaleza de las actividades ejecutadas por la persona carece de importancia por peligrosas o indeseables que éstas resulten, lo que concede un mayor estándar de protección al artículo 3 del CEDH que al previsto en los preceptos 32 y 33 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951<sup>43</sup>.

---

<sup>41</sup> STEDH (Sección 4ª) de 26 de julio de 2005. *Asunto N. c. Finlandia*, demanda no. 38885/02, pars. 158-159.

<sup>42</sup> *Chahal c. Reino Unido*, *op.cit.*, par. 80.

<sup>43</sup> STEDH (Gran Sala) de 28 de febrero de 2008. *Asunto Saadi c. Italia*, demanda no. 37201/06, pars. 138-139. El caso versa sobre la demanda presentada por el Sr. Saadi, de nacionalidad tunecina, contra la orden de deportación a Túnez decretada por el Gobierno italiano, al ser acusado de pertenencia a una organización responsable de dar apoyo logístico y financiero a personas integradas en células islamistas en Italia y en otros países. El Tribunal reiteró de forma unánime la naturaleza absoluta del artículo 3 de la CEDH con independencia del caso o del comportamiento de la persona que resulta afectada. En consecuencia, la Gran Sala concluyó que, existiendo pruebas veraces de que el demandado correría un riesgo real de ser torturado en su nación de origen, el Estado demandando tenía la obligación de no deportar a la víctima, constituyendo su actuación un acto ilícito, cual fue la violación del artículo 3 del

Partiendo de esta fundamentación, podría darse la situación de que un refugiado pudiera ser expulsado en virtud de los artículos 32 y 33 de la Convención de Ginebra y, sin embargo, no poder efectuarse la expulsión si con la misma se expusiera a la persona a un peligro real de ser condenada a muerte o sometida a tortura o penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes en el país de destino.

La STEDH *Chahal c. Reino Unido*<sup>44</sup> rechazó de forma categórica el argumento en virtud del cual las partes contratantes deben ponderar el riesgo que potencialmente pudiera sufrir la persona expulsada y el peligro que su permanencia en el territorio nacional podría conllevar. El deber de los Estados de atajar y combatir los actos de terrorismo en relación con las personas no nacionales residentes en su territorio, sospechosas de participar o poder participar en el futuro en dichos actos, no puede ejecutarse mediante la simple expulsión o devolución. Se requieren mecanismos más elaborados que necesariamente obligan a un mayor esfuerzo de tolerancia y comprensión<sup>45</sup>.

---

CEDH. En dicho proceso, tanto Italia como Reino Unido (que, en aplicación del artículo 36.2 CEDH, actuó como tercero interviniente) solicitaron a la Gran Sala que reinterpretara la obligación de *non refoulement* derivada del mentado artículo 3 en los supuestos de terrorismo, considerando que, en dichos casos, debería ser sopesado el riesgo de tortura o malos tratos en relación con el peligro concreto que el individuo representa para el Estado. También en *N. c. Finlandia*, *op. cit.*, par. 159; *Chahal c. Reino Unido*, *op. cit.*, par. 79.

<sup>44</sup> *Chahal c. Reino Unido*, *op. cit.*, par. 139. El caso versa sobre la demanda presentada por dos ciudadanos, de nacionalidad hindú, el Sr. Karamjit Singh Chahal y la Sra. Darshan Kaur Chahal, y sus vástagos de nacionalidad británica, la Sra. Kiranpreet Kaur Chahal y el Sr. Bikaramjit Singh Chahal. Pues bien, los hechos se remontan al año 1984 cuando el Sr. Chahal realizó un viaje con su familia a la región india de Punjab, conocida como la patria sij por los separatistas de esta religión. En el transcurrir de dicho periplo, el Sr. Chahal se convirtió a la religión sij. En mayo del mismo año, de vuelta en Reino Unido, llevó a cabo una intensa actividad política y religiosa relacionada con la defensa de la causa sij. En 1985, el Sr. Chahal fue detenido como sospechoso de formar parte de una conspiración para terminar con la vida del primer ministro hindú, Rajiv Gandhi, en una visita oficial a Inglaterra, acusación de la que fue redimido por falta de pruebas. Empero, en el año 1990 se decretó por el Gobierno británico orden de expulsión contra el demandante por amenaza a la seguridad nacional. Consecuentemente, la petición de asilo presentada por el nacional hindú fue rechazada pues, según alegó el Reino Unido, los arts. 32 y 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 vedaban la posibilidad de que se beneficiara de la protección concedida por la norma, debido al riesgo que representaba para el país.

<sup>45</sup> SALINAS DE FRÍAS, A. *Detención, garantías esenciales y Estado de derecho en la jurisprudencia del TEDH*. Disponible en la siguiente dirección electrónica: [revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/viewFile/9137/8730](http://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/viewFile/9137/8730), pp. 25-26.

## CAPÍTULO II

### PARÁMETROS EVALUADORES DEL RIESGO PROVENIENTE DEL ARTÍCULO 3 DEL CEDH

#### 1. La evaluación del riesgo

##### 1.1. El riesgo proveniente de agentes particulares

La vulneración del derecho a no ser sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes puede provenir de actos ejecutados directamente por órganos estatales pero, igualmente, de conductas realizadas por particulares, en situaciones en las que el Estado no está capacitado para brindar protección a la persona víctima de estos actos de tortura o penas crueles o degradantes. En este epígrafe se aborda, precisamente, la cuestión relativa al riesgo de sufrir tratos prohibidos por el Convenio que provienen de personas que actúan a título particular. Pues bien, el TEDH ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre esta materia en varias sentencias. Por ejemplo, en la STEDH dictada en el caso *H.L.R. c. Francia*<sup>46</sup>, el demandante, de nacionalidad colombiana, alegaba que su expulsión a ese país le expondría al riesgo de sufrir actos contrarios al artículo 3 del Convenio. En este asunto, el riesgo invocado por el demandante no procedía de autoridades públicas sino de los traficantes de droga colombianos que en el pasado le reclutaron para enviar droga y, en particular, debido a las represalias que el demandante podría sufrir, en respuesta a su colaboración con las autoridades francesas en aras de lograr la detención de un traficante. El Tribunal de Estrasburgo concluyó, en el presente caso, que debido al carácter absoluto del artículo 3 del CEDH, no puede excluirse su aplicación cuando el riesgo proviene de personas o grupos de personas que no ejercen una función pública<sup>47</sup>. No obstante, deberá acreditarse que el riesgo que corre el demandante es real («*real risk*») y que, además, las autoridades estatales del país de destino no son capaces de ofrecer una protección adecuada a la persona víctima de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o

---

<sup>46</sup> STEDH (Gran Sala) de 29 de abril de 1997. *Asunto H.L.R. c. Francia*, demanda no. 24573/94, pars. 44-45.

<sup>47</sup> *Ibíd.*, par. 32.

degradantes<sup>48</sup>. En el mismo sentido se pronunció el TEDH en el asunto *Ahmed c. Austria*<sup>49</sup>, al constatar que en Somalia no había ninguna autoridad pública capaz de ofrecer protección al demandante o en el caso *Sufi y Elmi c. Reino Unido*<sup>50</sup>, en el que el TEDH manifestó que en el supuesto de ser expulsados a Somalia, los demandantes correrían un riesgo real de ser sometidos a torturas por la milicia Hawiye.

Por su parte, cabe poner de manifiesto que las mujeres gozan de una especial protección en el contexto de la devolución cuando puedan ser víctimas de tortura en sus países de origen. De ese modo, el TEDH concluyó en la Sentencia dictada en el marco del caso *N. c. Suecia*<sup>51</sup> que la expulsión de la Sra. N a Afganistán constituía una infracción del artículo 3 del CEDH dado que la demandante tenía una relación extramatrimonial con un hombre en Suecia y en el supuesto de que pretendiera terminar la relación con su marido, se vería expuesta al riesgo de ser perseguida y sentenciada a muerte, máxime teniendo en cuenta que, tal y como pudo constatar la Corte, el 80% de las mujeres afganas sufren violencia doméstica y que, además, se trata de una práctica legitimada y consentida por las autoridades estatales.

## **1.2. El riesgo proveniente de un conflicto genérico**

El TEDH ha preconizado en su reiterada doctrina jurisprudencial que la ausencia de un cuadro de violencia generalizada en un Estado no es razón suficiente para excluir la posibilidad de que haya una situación de riesgo para una determinada persona en el supuesto de devolución, o a la inversa, la constatación de una situación de violencia persistente en un Estado no supone *per se* que la expulsión de una persona al mismo constituya una violación del artículo 3 del CEDH; deben existir razones suplementarias para determinar que hay una situación individual de peligro. De esta manera, en la

---

<sup>48</sup> Sin embargo, el Tribunal de Estrasburgo concluyó en este asunto que no habían motivos serios y fundados de que el demandante fuera a ser sometido a tratos proscritos por el artículo 3 del CEDH y, por consiguiente, la expulsión no supondría una vulneración del mentado precepto.

<sup>49</sup> STEDH (Gran Sala) de 17 de diciembre de 1996. *Asunto Ahmed c. Austria*, demanda no. 25964/94, par. 44.

<sup>50</sup> STEDH (Sección 4ª) de 28 de junio de 2011. *Asunto Sufi y Elmi c. Reino Unido*, demandas nos. 8319/07 y 11449/07, pars. 293 y ss.

<sup>51</sup> STEDH (Sección 3ª) de 20 de julio de 2010. *Asunto N. c. Suecia*, demanda no. 23505/09, pars. 51- 62.

STEDH dictada en el caso *Vilvarajah y otros c. Reino Unido*<sup>52</sup>, el Tribunal concluyó que no hubo infracción del artículo 3 del CEDH dado que las pruebas aportadas en relación al contexto general imperante en Sri Lanka no acreditaron que la situación personal de los demandantes fuera peor que la de la generalidad de los miembros de la comunidad tamil o la de los jóvenes tameses de sexo masculino que regresaban a ese Estado. En esta línea, el Tribunal siguió la teoría expuesta, conforme a la cual, la constatación de una situación de violencia generalizada contra determinadas comunidades dentro de un país no es razón suficiente como para apreciar que la devolución de uno de sus miembros a esa nación pudiera constituir una vulneración del artículo 3 del CEDH<sup>53</sup>.

No obstante, en los últimos años, el Tribunal de Estrasburgo parece sostener que, cuando se constate la existencia de un cuadro de violencia persistente contra un grupo determinado en la región de un país, el mero hecho de pertenecer a ese grupo constituye un elemento suficiente para disuadir al Estado de proceder a la expulsión. En este sentido, resulta paradigmática la STEDH dictada en el caso *Salah Sheekh c. Países Bajos*<sup>54</sup> que concluyó que la devolución del demandante, perteneciente a una minoría somalí, a una región considerada como segura en Somalia, supuso una infracción del artículo 3 del CEDH, habida cuenta de que el interesado pertenecía a la minoría Asraf, que no disponía de protección en otros grupos. Por tanto, parece que tras dicha Sentencia, el TEDH cambió, en cierto modo, la doctrina de que la constatación de un cuadro de violencia generalizada en un Estado no supone *per se* que la devolución de una persona al mismo constituya una vulneración del artículo 3 del CEDH. En efecto, de esta STEDH se colige que la mera pertenencia a una minoría en riesgo de sufrir violaciones sistemáticas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en el país

---

<sup>52</sup> *Vilvarajah y otros c. Reino Unido*, op. cit., par. 111.

<sup>53</sup> Vid. STEDH (Sección 3ª) de 20 de junio de 2017. *Asunto M.O. c. Suiza*, demanda no. 41282/16, pars. 70-71. En dicho asunto, el Tribunal de Estrasburgo consideró que la situación general de los derechos humanos en Eritrea no impedía la expulsión del demandante *per se*. Por consiguiente, considerando que, en aquellos supuestos en que se constate un cuadro de violencia general en el país de destino, son las circunstancias personales del demandante las que deben determinar si éste corre el riesgo de ser tratado de forma contraria al artículo 3 del CEDH, el Tribunal llegó a la conclusión de que no se había infringido en tal caso el meritado precepto.

<sup>54</sup> STEDH (Sección 3ª) de 11 de enero de 2007. *Asunto Salah Sheekh c. Países Bajos*, demanda no. 1948/04.

receptor constituye un elemento suficiente para que se concluya la obligación del Estado contratante de no proceder a la devolución de la persona interesada.

Así pues, puede afirmarse que la expulsión de una persona perteneciente a uno de estos grupos minoritarios – siempre que se acredite la pertenencia a tal minoría en riesgo – puede comportar la responsabilidad del Estado que efectúa la devolución por infringir el artículo 3 de la Convención de Roma de 1950. En la misma línea, en las STEDH dictadas en los asuntos *A.F. c. Francia*<sup>55</sup> y *A.A. c. Francia*<sup>56</sup>, el Tribunal consideró que la devolución de los demandantes a Sudán infringiría el artículo 3 del CEDH al constatar que los demandantes formaban parte de una etnia no árabe, la Birqid y tenían relación con el grupo rebelde JEM, lo que les exponía a un grave peligro de sufrir tortura por parte de las autoridades estatales. Así pues, como se colige de estos asuntos, el peligro de estar expuesto a sufrir tratos proscritos por el artículo 3 del CEDH puede tener su origen igualmente en el hecho de formar parte de un grupo considerado por las autoridades oficiales de un país como grupo de oposición o grupo rebelde.

## **2. La carga de la prueba**

De conformidad con la jurisprudencia del TEDH, el solicitante tiene la responsabilidad de aportar las pruebas que acrediten la existencia de motivos fundados para estimar que su expulsión de un Estado miembro puede comportar un riesgo real de sufrir tratos proscritos por el artículo 3 del CEDH. A tal efecto, cuando se hayan presentado estas pruebas, el gobierno deberá explicar cualquier duda que pudiera suscitarse en ese sentido<sup>57</sup>. Ahora bien, el Tribunal de Estrasburgo ha determinado que, en ciertas ocasiones, los peticionarios de asilo se hallan en una situación especial que hace imprescindible otorgarles el beneficio de la duda al analizar la credibilidad de sus alegaciones y de los documentos que presentan<sup>58</sup>. Aunque, si bien es cierto, cuando falte información o existan motivos fundados para dudar de la veracidad de las pruebas y de

---

<sup>55</sup> STEDH (Sección 5ª) de 15 de enero de 2015. *Asunto A.F. c. Francia*, demanda no. 80086/13, pars. 52-58.

<sup>56</sup> STEDH (Sección 5ª) de 15 de enero de 2015. *Asunto A.A. c. Francia*, demanda no. 18039/11, pars. 52-62.

<sup>57</sup> *Saadi c. Italia*, op. cit., par. 129.

<sup>58</sup> STEDH (Sección 3ª) de 9 de marzo de 2010. *Asunto R.C. c. Suecia*, demanda no. 41827/07, par. 50; *Salah Sheekh c. Países Bajos*, op. cit., par. 148.

los documentos presentados por el solicitante, la persona en cuestión deberá dilucidar de forma adecuada las cuestiones que se le planteen y ofrecer una respuesta satisfactoria<sup>59</sup>.

El TEDH ha proporcionado una serie de pautas sobre los documentos que pueden considerarse fiables al estudiar las condiciones del Estado de destino, como informes del ACNUR y de las organizaciones internacionales de derechos humanos. Por el contrario, el Tribunal no reconoce la fiabilidad de aquellos informes que provengan de fuentes de información desconocidas y aquellos cuyas conclusiones son contrarias a las de informes emitidos por organizaciones dignas de crédito<sup>60</sup>. En la STEDH dictada en el asunto *Sufi y Elmi c. Reino Unido*, el Tribunal analizó los informes de las organizaciones internacionales sobre las condiciones y los índices de violencia en Somalia. Sin embargo, el Tribunal no tuvo en cuenta este informe al disponer información imprecisa y contradictoria con otros datos de dominio público.

Es cierto que la existencia de un riesgo de malos tratos debe examinarse a la luz de la situación general en el país de retorno, así como de las circunstancias que rodean a la persona en cuestión. Así las cosas, en vista de la casuística expuesta anteriormente, cuando las fuentes en las que se basa el Tribunal, a la hora de enjuiciar un determinado asunto, describen una situación genérica, las alegaciones concretas del interesado deben ser corroboradas por otros elementos probatorios<sup>61</sup>. De ese modo, resulta ejemplar la STEDH *N.K. c. Francia*, de la que se infiere que el interesado debe acreditar sus alegaciones mediante otros elementos de prueba, cuando las fuentes de que dispone el Tribunal resulten exiguas. A la luz de esta constatación, el Tribunal estimó que, para apreciar el riesgo de sufrir tratos prohibidos por el artículo 3 del CEDH, no bastaba con la sola pertenencia del demandante a la confesión ahmadi, sino que debía acreditar que practicaba abiertamente tal religión y el proselitismo o, cuando menos, que era percibido como un proselitista por las autoridades pakistaníes<sup>62</sup>. Pues bien, en base a los

---

<sup>59</sup> Vid. Decisión de admisibilidad del TEDH (Sección 4ª) de 14 de septiembre de 2004. *Asunto V. Matsiukhina y A. Matsiukhin c. Suecia*, demanda no. 31260/04; Decisión sobre admisibilidad del TEDH (Sección 3ª) de 8 de marzo de 2007. *Asunto Collins y Akaziebie c. Suecia*, demanda no. 23944/05.

<sup>60</sup> *Sufi y Elmi c. Reino Unido*, op. cit., pars. 230- 234.

<sup>61</sup> STEDH (Sección 5ª) de 19 de diciembre de 2013. *Asunto N.K. c. Francia*, demanda no. 7974/1, par. 38.

<sup>62</sup> *Ibíd.*, par. 42.

documentos aportados por el interesado, la Corte consideró, en dicho asunto, que el demandante era percibido por las autoridades de su país como un verdadero proselitista y, por ende, con un marcado perfil susceptible de captar negativamente la atención de las autoridades. A tal efecto, se concluyó que la devolución del demandante a su país de origen lo expondría a un riesgo de malos tratos en virtud del artículo 3 de la Convención de 1950.

En relación con la naturaleza previsible y real del riesgo, cabe apuntar sucintamente que es el Estado que pretenda expulsar a un individuo el que debe valorar las circunstancias concurrentes de cada supuesto y, en particular, si existe un riesgo real de que la persona en cuestión pueda ser sometida a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes en el país de destino. Por su parte, el órgano de control es el encargado de determinar si el Estado actuó, en el contexto de la devolución de una persona o grupo de personas de forma diligente o, por el contrario, incurrió en arbitrariedad. A tal efecto, para determinar si el Estado actuó dentro de los parámetros de legalidad, el órgano de control valora diferentes elementos según la devolución de la persona se haya producido o no. En el supuesto de que la persona aún no haya sido expulsada, el TEDH tiene en consideración la situación real en el momento de dictar el fallo. Si la expulsión aún no se hubiere producido, el órgano de control debe apreciar la existencia de riesgo en relación con los hechos que el Estado conocía o debía conocer al momento de la expulsión<sup>63</sup>.

### **CAPÍTULO III**

#### **EL ALCANCE DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 DEL CEDH**

##### **1. El principio de no devolución en relación a cuestiones sanitarias**

En este punto, se aborda la cuestión relativa a la prohibición de expulsión de una persona aquejada por una enfermedad y la posible infracción del artículo 3 del CEDH con motivo de esa devolución al país de retorno. En este sentido, resulta paradigmática

---

<sup>63</sup> STEDH (Sección 5ª) de 6 de junio de 2013. *Asunto M.E. c. Francia*, demanda no. 50094/10, par. 49; *Saadi c. Italia*, *op. cit.*, par. 133; STEDH (Sección 2ª) de 5 de abril de 2011. *Asunto Toumi c. Italia*, demanda no. 25716/09, par.56.



la STEDH dictada en el caso *D. c. Reino Unido*, de 2 de mayo de 1997<sup>64</sup>, en la que el Tribunal concluyó que la expulsión de una enferma terminal a San Cristóbal y Nieves constituiría una violación del artículo 3 debido a la falta de medios e infraestructura médica en el país de destino, que ofrecieran a la demandante un tratamiento eficaz. Aunque en este caso no pudiera afirmarse que las condiciones que aguardarían a la demandante en el país de destino constituyeran un acto de tortura, la devolución le expondría a un grave riesgo de merma de su salud, lo cual supondría un trato inhumano.

Sin embargo, la doctrina sentada en la STEDH *D. c. Reino Unido* parece aislada pues, en otros casos análogos, el TEDH ha considerado que no había infracción del artículo 3 del CEDH. Un ejemplo de ello lo constituye la STEDH dictada en el marco del caso *Aoulmi c. Francia*<sup>65</sup> en la que el Tribunal concluyó que la devolución de un enfermo de hepatitis C a Argelia no constituía una violación de los estándares del artículo 3 de la Convención de 1950 al constatar que el demandante llevaba tiempo sin someterse a tratamiento y el mero hecho de que la atención médica en el Estado receptor fuera deficiente no constituía, por sí misma, una vulneración del precepto. Igualmente en la STEDH dictada en el caso *Bensaid c. Reino Unido*, el Tribunal consideró que la devolución a Argelia del demandante, que padecía esquizofrenia, tampoco conllevaba una vulneración del artículo 3 del Convenio, puesto que en dicho país tendría acceso a un tratamiento médico oportuno<sup>66</sup>.

Igualmente en la STEDH *N. c. Reino Unido*<sup>67</sup> la Corte determinó que no hubo vulneración del artículo 3 del CEDH por la expulsión de la Sra. N, enferma terminal, a Uganda. El TEDH fundamentó dicha decisión alegando que supondría una gravosa carga para los Estados parte en el CEDH tener que asumir la asistencia médica de todos

---

<sup>64</sup> STEDH (Gran Sala) de 2 de mayo de 1997. *Asunto D. c. Reino Unido*, demanda no. 30240/96.

<sup>65</sup> STEDH (Sección 4ª), de 17 de enero de 2006. *Asunto Aoulmi c. Francia*, demanda no. 50278/99, pars. 51-60.

<sup>66</sup> STEDH (Sección 3ª) de 6 de febrero de 2001. *Asunto Bensaid c. Reino Unido*, demanda no. 44599/98, pars. 36-40.

<sup>67</sup> STEDH (Gran Sala) de 27 de mayo de 2008. *Asunto N. c. Reino Unido*, demanda no. 26565/05, pars. 42-43.

aquellos ciudadanos que no la tuvieran garantizada en sus países de origen<sup>68</sup>. La resolución de este asunto se acompañó de una opinión disidente emitida por la jueza Tulkens y los jueces Bonello y Spielmann. En estos votos particulares se puso de manifiesto la palmaria contradicción entre los argumentos esgrimidos por la mayoría en dicho asunto y el reiterado criterio del TEDH en relación al carácter absoluto del artículo 3 del CEDH, dado que la prohibición de tortura no admite excepciones<sup>69</sup>.

Pese a que semejaba que esta iba a ser la senda a seguir a la vista de las medidas limitativas de derechos en materia sanitaria adoptadas por algunos EEMM en el presente contexto de receso económico, no ha sido así. En este sentido, es de gran trascendencia la STJUE de 18 de diciembre de 2014<sup>70</sup>, dictada en el seno de un procedimiento prejudicial, que declaró que la ejecución de una decisión de expulsión de un nacional de un tercer país aquejado de una enfermedad grave, podría ser contraria al artículo 5 de la Directiva 2008/115 relativa a normas y procedimientos comunes en los EEMM para el retorno de los extranjeros en situación irregular<sup>71</sup>, si el Estado receptor no dispusiera de una infraestructura médica capaz de ofrecer cobertura a las necesidades de la persona interesada.

A mayor abundamiento, el TEDH en la reciente Sentencia dictada en el marco del caso *Paposhvili c. Bélgica*<sup>72</sup> recordó que, el artículo 3 del CEDH protege a los

---

<sup>68</sup> Vid. STEDH (Sección 4ª) de 29 de enero de 2013. *Asunto S.H.H. c. Reino Unido*, demanda no. 60367/10, pars. 89 y ss. En dicho asunto, el TEDH concluyó que no hubo vulneración del artículo 3 del CEDH como consecuencia de la devolución a Afganistán del demandante, que padecía una discapacidad.

<sup>69</sup> *Saadi c. Italia*, op. cit., par. 138. Vid. STEDH (Sección 5ª) de 15 de mayo de 2012. *Asunto Nacic y otros c. Suecia*, demanda no. 16567/10, pars. 50-56; STEDH (Sección 4ª) de 10 de abril de 2012. *Asunto Balogun c. Reino Unido*, demanda no. 60286/09, par. 31. En dicho asunto, el Tribunal de Estrasburgo manifestó que, para apreciar una vulneración del artículo 3 del CEDH, el eventual trato que la persona en cuestión pudiera sufrir en el país de destino debe alcanzar un nivel mínimo de gravedad. En ese sentido, los extranjeros expulsados no pueden, en principio, reclamar el derecho a permanecer en el territorio de un Estado contratante para seguir beneficiándose de las prestaciones médicas, sociales o de otra índole prestadas por ese Estado, a menos que las circunstancias excepcionales del interesado afecten a la incompatibilidad de la ejecución de una decisión de expulsión de un extranjero con el artículo 3 del Convenio.

<sup>70</sup> STJUE (Gran Sala) de 18 de diciembre de 2014. *Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve c. Moussa Abdida*, demanda no. C-562/13, pars. 41-50.

<sup>71</sup> Cuyo tenor literal reza del siguiente modo: “Al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros tendrán debidamente en cuenta: a) el interés superior del niño, b) la vida familiar, c) el estado de salud del nacional de un tercer país de que se trate, y respetarán el principio de no devolución”.

<sup>72</sup> STEDH (Gran Sala) de 13 de diciembre de 2016. *Asunto Paposhvili c. Bélgica*, demanda no. 41738/10, pars. 135-138.

extranjeros que padecen una grave enfermedad contra la expulsión en casos excepcionales, en los que existan razones convincentes para no proceder a la devolución. En este caso, la enfermedad padecida por el demandante, de nacionalidad georgiana, era estable y estaba bajo control debido al tratamiento recibido en Bélgica. Sin embargo, habida cuenta de que las autoridades belgas no examinaron las posibles repercusiones del traslado del demandante en su estado de salud y la existencia de un tratamiento adecuado en el país de destino, la Gran Sala del TEDH llegó a la conclusión de que habría una violación del artículo 3 del Convenio si el solicitante hubiera sido trasladado a Georgia sin haberse llevado a cabo dicha evaluación<sup>73</sup>.

## **2. La extraterritorialidad en la aplicación del principio de no devolución por parte del TEDH**

Se puede acceder al territorio de la UE y los EEMM del Consejo de Europa por tierra, mar o aire. A este respecto, no es baladí señalar, aunque suene de Perogrullo que, en las operaciones de vigilancia de fronteras desempeñadas en el mar se han de respetar los derechos humanos y los derechos de los refugiados<sup>74</sup>. En el marco del CEDH, como es consabido, el Convenio es aplicable a todas las personas que se hallen bajo la jurisdicción de un Estado miembro del Consejo de Europa. Así pues, el TEDH ha defendido en su reiterada doctrina jurisprudencial que los individuos pueden estar bajo su jurisdicción cuando un país ejerce control sobre ellos en Alta mar<sup>75</sup>.

Sin duda, la Sentencia más importante en relación a esta cuestión fue la dictada por la Gran Sala del TEDH en el año 2012, que estableció los derechos de las personas migrantes que tratan de acceder a suelo europeo y las obligaciones de los Estados al respecto. Se trata de la Sentencia *Hirsi Jamaa y otros c. Italia*<sup>76</sup>. Los demandantes formaban parte de un grupo de alrededor de doscientos migrantes, entre los que había

---

<sup>73</sup> *Ibidem*, pars. 221-222.

<sup>74</sup> TEDH. *Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración*, 2014, pp. 84-85. Disponible en la siguiente dirección electrónica: [http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook\\_asylum\\_SPA.pdf](http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_asylum_SPA.pdf), pp. 40-41.

<sup>75</sup> *Vid.* Decisión sobre admisibilidad del TEDH (Sección 4ª) de 11 de enero de 2001. *Asunto Xhavara y otros c. Italia y Albania*, demanda no. 39473/98; STEDH (Gran Sala) de 29 de marzo de 2010. *Asunto Medvedyev y otros c. Francia*, demanda no. 3394/03.

<sup>76</sup> *Hirsi Jamaa y otros c. Italia*, *op. cit.*

solicitantes de asilo, que fue interceptado por los guardacostas italianos en Alta mar cuando se hallaban en la zona de búsqueda y salvamento de Malta. Estos migrantes fueron devueltos a Libia mediante un procedimiento sumario en aplicación de un acuerdo bilateral firmado entre Italia y Libia, sin concederles la posibilidad de solicitar protección internacional.

Pues bien, a tenor de las circunstancias expuestas, el Tribunal manifestó que la situación libia era bien sabida y fácil de constatar acudiendo a diversas fuentes internacionales. Por ende, determinó que las autoridades italianas conocían, o debían haber conocido el riesgo que correrían los demandantes de sufrir tratos contrarios al Convenio con su expulsión a Libia. Igualmente conocían, o debían haber conocido que, las garantías de protección de los solicitantes eran exiguas y, por consiguiente, había un riesgo latente de que fueran devueltos de forma arbitraria a sus Estados de origen. Por todo ello, la Corte concluyó que las autoridades italianas tendrían que haber tenido en cuenta la ausencia de un procedimiento de asilo en el país de destino y, a su vez, el impedimento de solicitar al gobierno libio el reconocimiento de la condición de refugiado otorgado por el ACNUR. La Gran Sala expuso que la circunstancia de que los demandantes no hubieran solicitado asilo no les eximía de respetar la obligación impuesta por el artículo 3 del Convenio. Así pues, la devolución de los solicitantes al país africano, supuso una violación del artículo 3 del CEDH, derivada tanto del hecho de estar expuestos los demandantes al riesgo de sufrir malos tratos en Libia, como del hecho de estar expuestos al riesgo de ser repatriados a Somalia y Eritrea, donde posiblemente correrían el mismo riesgo de ser sometidos a tortura.

Este caso resulta paradigmático al tratarse de la primera condena a un Estado, en virtud del artículo 4 del Protocolo no. 4 al CEDH que establece la prohibición de expulsiones colectivas de extranjeros, por hechos que no se han producido en el territorio nacional del Estado, sino en Alta mar. Se descartó la postura mantenida por el gobierno italiano que defendía la imposibilidad de la aplicación extraterritorial del precepto. El TEDH consideró que, atendiendo al fin del artículo 4 de evitar que los países puedan expulsar a nacionales de terceros Estados sin analizar su situación personal, limitar su aplicación al territorio nacional privaría de eficacia práctica al precepto, en una situación como la actual en que las corrientes migratorias en Europa se

han intensificado, haciéndose un mayor uso de las vías marítimas<sup>77</sup>. En suma, el Tribunal consideró que las expulsiones de extranjeros ejecutadas en el marco de intercepciones en alta mar por las autoridades de un Estado – en el ejercicio de su competencia soberana – y que tienen como efecto impedir a los inmigrantes llegar a las fronteras de ese país, constituye un ejercicio de su jurisdicción<sup>78</sup> y, por ende, implica la responsabilidad del Estado en el sentido del artículo 4 del Protocolo no. 4 del CEDH<sup>79</sup>. Esta STEDH, calificada de histórica por el ACNUR, representa un punto de inflexión en relación a las responsabilidades de los países sobre las prácticas de control de fronteras e intercepción y la gestión de los flujos migratorios<sup>80</sup>.

### 3. La devolución indirecta

No tienen cabida las devoluciones indirectas, es decir, cuando la expulsión se produce a un país seguro<sup>81</sup> en el que no existe el riesgo de sufrir tratos contrarios al artículo 3 del CEDH pero sí de la posibilidad de reenvío de la persona en cuestión a un tercer Estado en el que sí pueda existir dicho peligro<sup>82</sup>. En este sentido, en la meritada Sentencia *Hirsi Jamaa y otros c. Italia*, el Tribunal de Estrasburgo declaró la obligación para el Estado que efectúa la devolución – Italia en el presente caso – de asegurarse que el país intermediario – Libia – ofreciera garantías suficientes de que los demandantes no serían expulsados hacia sus países de origen, sin una pormenorizada evaluación de los riesgos que podrían correr. Esta obligación era todavía mayor teniendo en cuenta que, en dicho asunto, el país intermediario no era parte del Convenio de Roma de 1950<sup>83</sup>. Por ende, el análisis efectuado por el Tribunal no se basó en la posible existencia de una

---

<sup>77</sup> *Hirsi Jamaa y otros c. Italia*, op. cit., pars. 175-176.

<sup>78</sup> *Hirsi Jamaa y otros c. Italia*, op. cit., pars. 80-81.

<sup>79</sup> *Hirsi Jamaa y otros c. Italia*, op. cit., pars. 180.

<sup>80</sup> ACNUR. *Sentencia histórica del Tribunal de Estrasburgo sobre las devoluciones en el Mediterráneo*, 23 de febrero de 2012. Disponible en la siguiente dirección electrónica: <http://www.acnur.org/noticias/noticia/sentencia-historica-del-tribunal-de-estrasburgo-sobre-las-devoluciones-en-el-mediterraneo/>

<sup>81</sup> Sobre la noción de Estado seguro, véase el Capítulo V, epígrafe 1 de este trabajo.

<sup>82</sup> Decisión sobre admisibilidad del TEDH (Sección 3ª) de 7 de marzo de 2000. *Asunto T.I. c. Reino Unido*, demanda no. 43844/98, par. 1.

<sup>83</sup> DE CASTRO SÁNCHEZ, C. TEDH – *Sentencia de 23.02.2012 (Gran Sala), Hirsi Jamaa E.A. c. Italia*, 27765/09 – “Artículo 3 y 13 del CEDH; Artículo 4 del Protocolo nº 4 – tortura y tratos inhumanos y degradantes – derecho a un recurso efectivo – prohibición de las expulsiones colectivas de extranjeros”. *El CEDH como límite de las políticas migratorias europeas*. Revista de Derecho Comunitario Europeo, ISSN 1138-4026, año nº 17, nº 46, 2013, p. 1129.

vulneración del Convenio, sino en dilucidar si había garantías suficientes para evitar que los individuos concernidos fueran objeto de una devolución arbitraria a sus Estados de origen, “teniendo en cuenta, especialmente, la ausencia de cualquier tipo de procedimiento de asilo y la imposibilidad de hacer que las autoridades libias reconociesen los estatutos de refugiado otorgados por ACNUR”<sup>84</sup>.

En el mismo sentido, el TEDH, en su Decisión sobre admisibilidad dictada en el caso *T.I. c. Reino Unido*<sup>85</sup>, determinó que la devolución indirecta hacia un Estado intermediario deja intacta la responsabilidad del país que realiza la devolución. Y es que, como se afirma en la STEDH *M.S.S. c. Bélgica*<sup>86</sup>, corresponde a los Estados en aplicación del Sistema de Dublín, comprobar que el procedimiento de asilo del país intermediario ofrezca garantías suficientes en aras de evitar que un solicitante de asilo pueda ser expulsado, directa o indirectamente, a su Estado de origen sin una evaluación desde el punto de vista del CEDH que permita valorar los riesgos que enfrentaría. A este respecto, es necesario abordar desde una visión genérica la práctica surgida en la UE en aplicación de los sistemas de Schengen y de Dublín.

El acuerdo Schengen, firmado en el año 1985, posibilitó la creación de un territorio único sin fronteras en la UE, lo que supuso un gran avance tanto para la integración europea como para el establecimiento y refuerzo de una ciudadanía europea<sup>87</sup>. Este espacio europeo de libre circulación de las personas hizo necesario establecer una política de asilo común para toda la Unión, que culminó con la firma de la Convención de Dublín en 1990<sup>88</sup>, reemplazada posteriormente por Dublín II<sup>89</sup>

---

<sup>84</sup> *Hirsi Jamaa y otros c. Italia*, op. cit., par. 156.

<sup>85</sup> *T.I. c. Reino Unido*, op. cit., par.

<sup>86</sup> *M.S.S. c. Bélgica*, op. cit., pars. 342-343.

<sup>87</sup> OLESTI RAYO, A. *El Espacio Schengen y la reinstauración de los controles en las fronteras interiores de los Estados miembros de la Unión Europea*. REAF, nº 15, 2012, págs. 44-84.

<sup>88</sup> Convenio relativo a la determinación del Estado responsable del examen de las solicitudes de asilo presentadas en los Estados miembros de las Comunidades Europeas, 15 de junio de 1990.

<sup>89</sup> Unión Europea. Reglamento nº 343/2003 del Consejo de la Unión Europea de 18 de febrero de 2003 por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los estados miembros por un nacional de un tercer país. *DOUE*, de 25 de febrero de 2003. Este Reglamento fue posteriormente derogado por el artículo 48 del Reglamento 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013 por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (texto refundido). *DOUE*, L 180/31, de 29 de junio de 2013.

(también derogado) y que fue desarrollado posteriormente por el Reglamento de aplicación n.º 1560/2003, de 2 de septiembre<sup>90</sup> por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los EEMM por un nacional de un tercer país. De conformidad con lo establecido en las disposiciones de este Reglamento, en términos similares a lo dispuesto en el Reglamento de Dublín III, la persona que entre a territorio de la UE y quiera solicitar asilo, deberá hacerlo ante las autoridades del país al que acceda en primer lugar, de manera que, en el caso de no hacerlo, y presenta su solicitud ante las autoridades de otro Estado miembro, éste tiene la potestad de transferir a la persona al país responsable de examinar la solicitud. Este elenco de normativa expuesta no es cuestión baladí pues, como se verá más adelante, de la jurisprudencia dictada por el TEDH se ha desvirtuado la presunción de que todos los EEMM respetan el principio de no devolución y la consideración de que los EEMM son países seguros para los nacionales de terceros Estados.

Por cuanto antecede, resulta de interés reseñar que, en el presente supuesto, el TEDH ha demostrado nuevamente su posición de garante supremo de los derechos humanos en el continente europeo. Es cierto que los Estados europeos tienen competencia para establecer las medidas que consideren pertinentes con la finalidad de controlar la entrada de extranjeros, no obstante, ello no debe colisionar con el respeto de los derechos humanos garantizados por el CEDH<sup>91</sup>. En este sentido, puede afirmarse que la protección contra la devolución indirecta garantizada por el TEDH pone de manifiesto nuevamente el amplio alcance de la protección conferida por el artículo 3 del CEDH, así como de su carácter absoluto.

---

<sup>90</sup> Unión Europea. Reglamento n.º 1560/2003 de la Comisión de 2 de septiembre de 2003 por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no. 343/2003 del Consejo por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país. *DOUE*, L 222/3, de 5 de septiembre de 2003.

<sup>91</sup> DE CASTRO SÁNCHEZ, C. TEDH – *Sentencia de 23.02.2012 (Gran Sala), Hirsi Jamaa E.A. c. Italia, 27765/09* – “Artículo 3 y 13 del CEDH; Artículo 4 del Protocolo n.º 4 – tortura y tratos inhumanos y degradantes – derecho a un recurso efectivo – prohibición de las expulsiones colectivas de extranjeros”. *El CEDH como límite de las políticas migratorias europeas, op. cit.*, p. 1132.

#### **4. La aplicación del artículo 3 del CEDH en relación con otros derechos salvaguardados por el Convenio**

Como se ha afirmado con anterioridad, si bien el riesgo de vulneración de la prohibición de tortura establecida en el artículo 3 del CEDH es el supuesto más común en la aplicación del principio de no devolución, esta norma actúa igualmente frente a violaciones del derecho a la vida y del derecho a la tutela judicial efectiva, como se analiza en los siguientes epígrafes.

##### **4.1. El derecho a la vida**

###### **4.1.1. Regulación internacional del derecho a la vida**

El derecho de toda persona a la vida es, por antonomasia, el derecho más elemental y como corolario del mismo, nadie puede ser privado de la vida de forma arbitraria. De ese modo, el artículo 6 del PIDCP señala que se trata de un derecho inherente a la persona humana. En aquellos países en que no se haya abolido la pena capital, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves y cuando la misma haya sido impuesta en cumplimiento de una sentencia definitiva de un tribunal competente. En este sentido, la prohibición que establecía el artículo 6 del PIDCP no era absoluta. Sin embargo, el Protocolo Facultativo del PIDCP aprobado en 1989<sup>92</sup> transformó sustancialmente el alcance del derecho a la vida, al excluir la posibilidad de ejecutar a una persona sometida a la jurisdicción de un Estado Parte en el Protocolo.

A nivel comunitario, el artículo 2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales establecía, en términos similares, que nadie puede ser privado de la vida intencionadamente, salvo en ejecución de una condena que imponga la pena capital. Y, más tarde, el Protocolo número 6 del CEDH<sup>93</sup> prohibió la pena capital en tiempos de paz. Por su parte, el Protocolo número 13 al

---

<sup>92</sup> Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, Nueva York, 15 de diciembre de 1989, Colección de Tratados de Naciones Unidas, N.º 14668, Vol. 1642.

<sup>93</sup> Protocolo número 6 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, relativo a la abolición de la pena de muerte, Estrasburgo, 28 de abril de 1983, ETS n.º. 114.



mismo CEDH<sup>94</sup> abolió la pena capital, sin admitir ninguna excepción. En el marco universal, el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos<sup>95</sup> reconoce el derecho de todo individuo a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

#### **4.1.2. La constatación de la vulneración del derecho a la vida por el TEDH**

El TEDH se ha pronunciado en numerosos supuestos sobre la cuestión relativa a la vulneración del derecho a la vida en el contexto de expulsión o extradición de un extranjero. Una de las STEDH más eximias en relación al derecho a la vida, codificado en el artículo 2 del CEDH, es la dictada en el citado caso *Soering c. Reino Unido*<sup>96</sup> en la que el Tribunal consideró que no se quebrantaría el derecho a la vida del Sr. Soering en el supuesto de que Reino Unido procediese a su extradición a EEUU dónde podría ser condenado a pena capital. El motivo se debió a que en el momento en que se produjeron los hechos, Reino Unido no era parte del Protocolo número 6 del CEDH. Sin embargo, si se constató, como se ha visto previamente, que Reino Unido violaría el artículo 3 del CEDH<sup>97</sup> si se ejecutase la resolución del Secretario de Estado de entregar al demandante a EEUU.

La primera vez en la que el TEDH constató la violación del derecho a la vida establecido en el artículo 2 del CEDH fue en el paradigmático caso *Bader y Kanbor c. Suecia*<sup>98</sup>. Así es, en dicho asunto el Tribunal consideró que la deportación del demandante a Siria, país en el que fue declarado culpable *in absentia* de complicidad en un asesinato y condenado a muerte, constituiría una violación de los artículos 2 y 3 del CEDH. El hecho que llevó al Tribunal a dicha consideración fue la falta de garantías en que se celebró el proceso en virtud del cual se condenó al Sr. Bader en Siria dado que las pruebas orales no fueron examinadas en la vista y ni el acusado ni su abogado

---

<sup>94</sup> Protocolo número 13 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias, Vilnius, 3 de mayo de 2002, ETS n°. 187.

<sup>95</sup> Naciones Unidas. *Declaración Universal de Derechos Humanos*, París, 10 de diciembre de 1948, Resolución 217 A (III).

<sup>96</sup> *Soering c. Reino Unido*, *op. cit.*, pars. 102 y 110.

<sup>97</sup> Cuyo tenor literal reza del siguiente modo: “Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”.

<sup>98</sup> STEDH (Sección 2ª) de 8 de noviembre de 2005. *Asunto Bader y Kanbor c. Suecia*, demanda no. 13284/04, 43-49.

estuvieron presentes en la misma. También, en el marco de la Sentencia dictada en el caso *Al Nashiri c. Polonia*<sup>99</sup> el TEDH determinó que el traslado del Sr. Al Nashiri llevado a cabo por Polonia constituyó una violación de los artículos 2 y 3 del CEDH en relación con el artículo 1 del Protocolo número 6 del Convenio. Esta conclusión se fundamentó en base a la constatación de un riesgo sustancial y previsible de que el demandante podría ser sometido a pena de muerte tras su juicio ante la comisión militar.

Recientemente, en la STEDH *S.K. c. Rusia*<sup>100</sup> se concluyó que el traslado del demandante de Rusia a Siria supondría igualmente una vulneración del derecho a la vida establecido en el artículo 2 del CEDH y del artículo 3 de la misma norma. También en la STEDH dictada en el caso *F.G. c. Suecia*<sup>101</sup>, el Tribunal concluyó que se produciría una violación de los artículos 2 y 3 del CEDH en el supuesto de que el demandante, convertido al cristianismo en Suecia, fuera devuelto a Irán sin una reevaluación *ex nunc* por parte de las autoridades suecas de las consecuencias que podría comportar la conversión religiosa del demandante. A diferente criterio llegó el TEDH en la Sentencia dictada en el caso *Al-Saadoon y Mufdhi c. Reino Unido*<sup>102</sup>, en el que ambos demandantes fueron entregados a las autoridades iraquíes por parte de las fuerzas armadas británicas en Irak. Pues bien, el Tribunal concluyó que Reino Unido había vulnerado el artículo 3 del CEDH dado que con la entrega, los demandantes fueron expuestos al riesgo de ser condenados a muerte y ejecutados. No obstante, no abordó el planteamiento de la posible vulneración del artículo 2 ni del Protocolo número 13 del CEDH. En esta línea, resulta relevante poner de relieve el planteamiento esgrimido por el gobierno británico y la respuesta ofrecida por el Tribunal en dicho asunto dado que el gobierno británico alegó que había cumplido con sus obligaciones contraídas en un Memorando celebrado con Irak. No obstante, el Tribunal fue taxativo

---

<sup>99</sup> STEDH (Sección 4ª) de 24 de julio de 2014. *Asunto Al Nashiri c. Polonia*, demanda no. 28761/11, pars. 576-579.

<sup>100</sup> STEDH (Sección 3ª) de 14 de febrero de 2017. *Asunto S.K. c. Rusia*, demanda no. 52722/15, pars. 62-63.

<sup>101</sup> STEDH (Gran Sala) de 23 de marzo de 2016. *Asunto F.G. c. Suecia*, demanda no. 43611/11, pars. 156-158.

<sup>102</sup> *Al-Saadoon y Mufdhi c. Reino Unido*, op. cit., par. 143.

al recordar la prohibición de que un Estado contratante celebre un acuerdo con otro país si el mismo infringe las obligaciones asumidas en virtud del Convenio<sup>103</sup>.

Por cuanto antecede, puede colegirse que aquellos Estados que han abolido la pena capital no pueden expulsar, entregar o extraditar a una persona a otro país que mantenga en su ordenamiento jurídico interno la pena de muerte<sup>104</sup>. *A sensu contrario*, cabe poner de manifiesto que dicha obligación no compele a aquellos países que prevean en su legislación interna la pena máxima.

## **4.2. El derecho a la tutela judicial efectiva**

### **4.2.1. Regulación internacional del derecho a la tutela judicial efectiva**

Este derecho está establecido en diversos convenios internacionales de protección de los derechos humanos. A este respecto, el artículo 6 del CEDH regula el derecho a un proceso equitativo, disponiendo que cualquier ciudadano tiene derecho a que su causa sea oída de forma equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial predeterminado por la ley.

Puede decirse que el derecho a un proceso equitativo incluye, en sí mismo, diversas garantías. Así pues, el mentado precepto reconoce igualmente el derecho del acusado a la presunción de inocencia, el derecho a ser informado de la causa de la acusación formulada contra él, el derecho a disponer de tiempo para la preparación de su defensa, el derecho a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección, pudiendo beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita si no dispone de medios para costearlo, el derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren en su contra o el derecho a ser asistido gratuitamente de un intérprete. En el mismo sentido, el artículo 14 del PIDCP contempla amén de las mismas garantías expuestas, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, a una segunda instancia o el respeto al principio de contradicción. Por su parte, la DUDH reconoce en los artículos 10 y 11 el derecho a un proceso equitativo.

---

<sup>103</sup> Ibídem, par. 138.

<sup>104</sup> BOLLO AROCENA, M.D. *Expulsión de extranjeros, derecho internacional y derecho europeo*, op. cit., p. 100.

#### 4.2.2. La naturaleza flagrante de la denegación de justicia

La STEDH dictada en el caso *Soering c. Reino Unido* puso de manifiesto por primera vez que una resolución de extradición puede suscitar problemas en relación al artículo 6 del CEDH cuando la persona sufra o se arriesgue a sufrir una flagrante denegación de justicia<sup>105</sup>. Sin embargo, en dicho asunto, el Tribunal concluyó que no se daban las circunstancias para apreciar que había habido un supuesto de denegación de justicia proscrito por el artículo 6 de la Convención de 1950. Por ende, según se infiere de la propia STEDH mencionada *ut supra*, únicamente en los supuestos de *flagrante* denegación de justicia que pueda sufrir la persona sometida a un procedimiento de expulsión o extradición, podría verse comprometida la responsabilidad del Estado contratante que adopta la medida. En este punto, cabe plantearse qué debe entenderse por *flagrante* infracción del derecho a un proceso debido.

El Tribunal de Estrasburgo tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la infracción del derecho a un proceso debido en la Sentencia dictada en el caso *Incal c. Turquía*<sup>106</sup>. En este caso, el Sr. Incal, de nacionalidad turca, fue condenado por los tribunales de su país por realizar propaganda separatista que incitaba a la población a la resistencia contra el gobierno, al enfrentamiento y al odio entre ciudadanos. Al haber sido considerados los hechos como susceptibles de poner en peligro los valores fundamentales de la República de Turquía, los Tribunales de Seguridad del Estado eran *ipso iure* los competentes para conocer del asunto y estaban compuestos por tres jueces, de los cuales uno era miembro de la magistratura militar. El hecho de que una persona civil tuviere que comparecer ante una jurisdicción compuesta, aunque sólo por una mínima parte, por jueces militares llevó al TEDH a dudar legítimamente de la imparcialidad e independencia del Tribunal de Seguridad del Estado de Izmir dado que la presencia de un juez militar podría conllevar que éste se viese indebidamente influido por cuestiones ajenas a la naturaleza del proceso. En consecuencia, el TEDH concluyó que hubo una violación del artículo 6 del CEDH. Igualmente, en *Al-Moayad c. Alemania* se afirmó que constituye un supuesto de *flagrante* vulneración del derecho a

---

<sup>105</sup> *Soering c. Reino Unido*, *op.cit.*, par. 113.

<sup>106</sup> STEDH (Gran Sala) de 9 de junio de 1998. *Asunto Incal c. Turquía*, demanda no. 22678/93, pars. 65-73.

un proceso debido el sometimiento de una persona sospechosa de haber cometido un delito a un tribunal del país de destino que no reúna las condiciones de independencia e imparcialidad y, por consiguiente, no pueda revisarse adecuadamente la legalidad de la detención, ante la falta de pruebas concluyentes. Por añadidura, también se consideró como una violación *flagrante* de un juicio justo la denegación deliberada y sistemática del acceso a un abogado para defenderse, especialmente cuando el acusado es detenido en un país extranjero<sup>107</sup>.

En la STEDH *Othman (Abu Qatada) c. Reino Unido*<sup>108</sup> se reconoció que la expulsión del demandante a Jordania constituiría una flagrante violación del derecho a un proceso debido del artículo 6 del CEDH dado que de ser expulsado a ese país éste podría ser sometido a un juicio cuyas pruebas incriminatorias habrían sido conseguidas mediante actos de tortura a terceras personas. Así pues, puede afirmarse que situaciones tales como el enjuiciamiento de civiles por jueces militares, la obtención de pruebas bajo tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, la denegación del derecho a ser asistido por un abogado o el sometimiento del acusado a un tribunal que no reúna las condiciones de independencia e imparcialidad pueden comportar una flagrante vulneración del derecho a un proceso debido. Ahora bien, como ha tenido ocasión de manifestar el propio TEDH, es el demandante quien debe demostrar la naturaleza *flagrante* de la denegación de justicia que teme<sup>109</sup>.

## CAPÍTULO IV

### LAS MEDIDAS CAUTELARES

#### 1. El ámbito de aplicación de la Regla 39 del Reglamento del TEDH

Las medidas cautelares o provisionales son medidas de urgencia que se aplican en aquellos supuestos en los que exista un riesgo inminente de daño irreparable. El

---

<sup>107</sup> Decisión sobre admisibilidad del TEDH (Sección 5ª) de 20 de febrero de 2007. *Asunto Al-Moayad c. Alemania*, demanda no. 35865/03, par. 101. También en STEDH (Sección 1ª) de 25 de julio de 2002. *Asunto Papon c. Francia*, demanda no. 54210/00, par. 90.

<sup>108</sup> *Othman (Abu Qatada) c. Reino Unido*, *op. cit.*, pars. 282-283.

<sup>109</sup> Decisión sobre admisibilidad del TEDH (Sección 3ª) de 16 de octubre de 2001. *Asunto Einhorn c. Francia*, demanda no. 71555/01, pars. 34-35.

TEDH puede, en virtud del artículo 39 de su Reglamento<sup>110</sup>, indicar a las partes cualquier medida cautelar que estimen deba ser adoptada en interés de las mismas o del buen desarrollo del proceso. La solicitud de una medida provisional puede ser presentada por cualquier persona que tenga la intención de plantear una demanda ante el Tribunal de conformidad con el artículo 34 del CEDH<sup>111</sup> y que se enfrente a un riesgo real de daño grave. Así pues, dicha persona puede presentar la demanda y la solicitud de medidas cautelares con independencia de su nacionalidad, siempre que se halle bajo la jurisdicción de uno de los Estados Partes del CEDH, en el sentido del artículo 1 de la Convención. Las medidas provisionales se aplicarán en el marco del desarrollo del proceso y no vinculan ni prejuzgan las decisiones futuras que adopte el Tribunal, bien sea sobre la admisibilidad o sobre la cuestión de fondo del asunto. En esta etapa, de hecho, no se dispone de todos los elementos para llevar a cabo un análisis completo del caso<sup>112</sup>. Asimismo, el TEDH podrá levantarlas en cualquier momento en que considere la innecesariedad de su mantenimiento<sup>113</sup>.

Frecuentemente, la medida cautelar que los demandantes suelen solicitar es la suspensión de órdenes de expulsión y/o extradición durante el tiempo que dura el examen de la demanda. En este sentido, el Tribunal de Estrasburgo ha manifestado que la Regla 39 desempeña un papel fundamental a la hora de evitar situaciones irreversibles que impedirían al Tribunal examinar adecuadamente las solicitudes y, en todo caso, garantizar al solicitante que pueda gozar de forma práctica y efectiva de los derechos del Convenio<sup>114</sup>. En aquellos supuestos en que pudiera determinarse *prima facie* que existe un riesgo de daño irreparable para la persona, el Tribunal puede indicar al país demandado que el interesado no sea trasladado a un Estado en particular. Ahora

---

<sup>110</sup> Reglamento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 14 de noviembre de 2016.

<sup>111</sup> Cuyo tenor literal reza del siguiente modo: “El Tribunal podrá conocer de una demanda presentada por cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una violación, por una de las Altas Partes Contratantes, de los derechos reconocidos en el Convenio o sus protocolos. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a no poner traba alguna al ejercicio eficaz de este derecho”.

<sup>112</sup> *M.S.S. c. Bélgica*, op. cit., par. 355. También en STEDH (Gran Sala) de 10 de marzo de 2009. *Asunto Paladi c. Moldavia*, demanda no. 39806/05, par. 89.

<sup>113</sup> Ficha temática del TEDH *Medidas cautelares*. Disponible en la siguiente dirección electrónica: [http://www.echr.coe.int/Documents/FS\\_Interim\\_measures\\_SPA.pdf](http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Interim_measures_SPA.pdf), p. 2.

<sup>114</sup> STEDH (Gran Sala) de 4 de febrero de 2005. *Asunto Mamatkulov y Askarov c. Turquía*, demandas nos. 46827/99 y 46951/99, par. 125.

bien, aunque el Tribunal ha declarado la adopción de estas medidas principalmente en relación a los países demandados, nada impide a que puedan dirigirse a personas o entidades privadas. Así las cosas, en las Sentencias dictadas en el marco de los casos *Ilașcu y otros c. Moldavia y Rusia*<sup>115</sup> y *Rodić y otros tres c. Bosnia y Herzegovina*<sup>116</sup> el Tribunal instó a uno de los demandantes a que pusiera fin a la huelga de hambre que había iniciado.

Es cierto que los supuestos de aplicación del artículo 39 no aparecen en el Reglamento del TEDH, no obstante, se pueden colegir de su doctrina jurisprudencial. Generalmente, las medidas cautelares se aplican en aquellos supuestos en los que, de ejecutarse la orden de expulsión o devolución, la persona podría correr el riesgo de sufrir amenazas contra su vida, en el sentido del artículo 2 del CEDH o de tratos contrarios al artículo 3 del mismo texto normativo. En este orden de cosas, el TEDH en la Sentencia dictada en el caso *F.H. c. Suecia*<sup>117</sup> acordó aplicar el artículo 39 de su Reglamento y solicitó al gobierno sueco que suspendiera la ejecución de la orden de expulsión del demandante en tanto se dirimiera el examen de la demanda. Según las alegaciones del propio demandante, su expulsión a Irak le expondría a un riesgo real de ser sometido a tortura o a tratos inhumanos por su confesión cristiana y por su condición de antiguo miembro de la Guardia Republicana y del Partido Raaz. La medida cautelar fue levantada cuando la STEDH, que concluyó que la expulsión del demandante a Irak no supondría una vulneración de los artículos 2 y 3 del CEDH, devino firme<sup>118</sup>.

Excepcionalmente, la prohibición de la imposición de la pena de muerte – artículo 1 del CEDH – puede ser igualmente objeto de una medida cautelar de conformidad con el artículo 39 del Reglamento. Así pues, el TEDH ha decidido adoptar medidas cautelares en aras de evitar que la persona en cuestión sea condenada a pena de muerte o a cadena perpetua en el supuesto de ser extraditada. En la STEDH *Öcalan c.*

---

<sup>115</sup> STEDH (Gran Sala) de 8 de julio de 2004. *Asunto Ilașcu y otros c. Moldavia y Rusia*, demanda no. 48787/99, pars. 10-11.

<sup>116</sup> STEDH (Sección 4ª) de 27 de mayo de 2008. *Asunto Rodić y otros tres c. Bosnia y Herzegovina*, demanda no. 22893/05, par. 4 y 11.

<sup>117</sup> STEDH (Sección 3ª) de 20 de enero de 2009. *Asunto F.H. c. Suecia*, demanda no. 32621/06, pars. 4-5.

<sup>118</sup> *Ibidem*, par.107.

*Turquía*<sup>119</sup> la Gran Sala decidió solicitar a las autoridades turcas que establecieran todas las medidas necesarias para que la pena capital pronunciada contra el demandante no se llevara a cabo. Con ello, se pretendía que el Tribunal pudiera analizar la admisibilidad y el fondo de las quejas alegadas por el demandante en virtud del CEDH. Una vez abolida la pena de muerte en tiempo de paz, en el año 2002, el Tribunal de Seguridad del Estado de Ankara conmutó la pena capital que pesaba sobre el demandante por la de cadena perpetua. En el mismo sentido, el TEDH en la Decisión de admisibilidad pronunciada en el caso *Nivette c. Francia*<sup>120</sup> decidió aplicar la medida cautelar de suspensión de la orden de extradición del demandante, sospechoso de asesinato de su pareja, a EEUU dado que el mismo podría ser sometido a tratos proscritos por el artículo 3 del CEDH. En tal caso, la medida cautelar fue levantada tras la constatación por el Tribunal de la suficiencia de las garantías diplomáticas ofrecidas por el gobierno estadounidense a las autoridades francesas, de que el demandante no sería condenado a pena de muerte ni a cadena perpetua no revisable.

Como se ha manifestado, la solicitud de una medida provisional debe plantearse en cuanto haya un riesgo inminente de devolución. En aras de dilucidar qué debe entenderse por riesgo inminente, el Tribunal se basa en el principio de subsidiariedad, en cuya virtud dicho riesgo se apreciará cuando no sea dable utilizar las vías legales internas que puedan suspender la expulsión, o cuando las mismas hayan sido utilizadas sin el resultado pretendido. Se deberá indicar la fecha y hora en que esté prevista la expulsión para que el Tribunal pueda apreciar igualmente la naturaleza de riesgo inminente<sup>121</sup>. En los supuestos en que no esté del todo clara la eficacia del recurso interno, la solicitud de medidas provisionales habría de presentarse sin dilación, con independencia de que los procedimientos internos sigan pendientes. El recurso será

---

<sup>119</sup> STEDH (Gran Sala) de 12 de mayo de 2005. *Asunto Öcalan c. Turquía*, demanda no. 46221/99, par. 5.

<sup>120</sup> Decisión de admisibilidad del TEDH (Sección 1ª) de 3 de julio de 2001. *Asunto Nivette c. Francia*, demanda no. 44190/98. Vid. también STEDH (Sección 4ª) de 10 de abril de 2012. *Asunto Babar Ahmad y otros c. Reino Unido*, demandas nos. 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 y 67354/09, pars. 5-6.

<sup>121</sup> ACNUR. *Guía relativa a la solicitud de medidas provisionales en virtud de la regla 39 del Reglamento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para personas en necesidad de protección internacional*, julio de 2007. Disponible en la siguiente dirección electrónica: [www.acnur.es/PDF/guia\\_regla39\\_espanol\\_20120720094755.pdf](http://www.acnur.es/PDF/guia_regla39_espanol_20120720094755.pdf), pp. 12 y 13.



eficaz si, por ejemplo, dispone de un efecto suspensivo desde el punto de vista práctico<sup>122</sup>.

## 2. La carga de la prueba

Cabe significar que no existen principios específicos en relación al criterio y carga de la prueba que debe seguir el Tribunal en aplicación del artículo 39 del Reglamento, no obstante, de su práctica se pueden inferir algunas nociones básicas. La responsabilidad inicial de motivar una solicitud individual corresponde al solicitante, quien debe explicar pormenorizadamente las causas que justifican su temor a ser devuelto. Para ello, habrá de demostrar que se enfrenta a un riesgo real de daño grave proscrito por el CEDH. A la hora de determinar si dicho riesgo de daño grave es real, el Tribunal tiene en consideración una serie de elementos, tales como la credibilidad de las pruebas que el solicitante aporta, la situación reinante en el país de destino y, en su caso, la información recogida por el ACNUR, siempre que sea relevante y esté actualizada. Del mismo modo, el Tribunal, en sus decisiones y sentencias, también menciona con asiduidad informes de ONGs reconocidas, como Naciones Unidas<sup>123</sup>.

No es baladí señalar que debido a la brevedad de los plazos en los supuestos de solicitudes de medidas provisionales, resulta alambicado que las mismas cumplan con los criterios de prueba exigidos a las solicitudes individuales de conformidad con el meritado artículo 34 del CEDH. No obstante, se habrá de demostrar, en la medida de lo posible, que existen razones fundadas para estimar que hay un riesgo real de daño grave para el demandante en el supuesto de ser expulsado<sup>124</sup>. Así pues, a la hora de determinar

---

<sup>122</sup> STEDH (Sección 2ª) de 26 de abril de 2007. *Asunto Gebremedhin [Gaberamadhien] c. Francia*, demanda no. 25389/05, par. 53.

<sup>123</sup> ACNUR. *Guía relativa a la solicitud de medidas provisionales en virtud de la regla 39 del Reglamento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para personas en necesidad de protección internacional*, op.cit., p. 10.

<sup>124</sup> En este sentido, resulta de especial trascendencia la STEDH dictada en el caso *Paladi c. Moldavia*, op.cit., par. 89: “Se desprende de la propia naturaleza de las medidas provisionales que la decisión sobre si es necesario indicar su adopción en un caso determinado a menudo debe tomarse en un lapso de tiempo muy corto (...). Por tanto, con frecuencia, la relación completa de los hechos del caso queda sin determinar hasta el momento de la sentencia del Tribunal sobre el fondo (...). Es precisamente con el fin de preservar la capacidad del Tribunal para emitir un juicio (...) para lo que se indican dichas medidas. Hasta ese momento, puede resultar inevitable para el Tribunal la adopción de medidas provisionales sobre la base de hechos que, a pesar de parecer aconsejarlas a primera vista, con posterioridad se añaden a otros o se contrastan hasta el punto de hacer cuestionable la justificación de tales medidas”.

la credibilidad, se apreciará la coherencia de las alegaciones y los argumentos esgrimidos tanto en la solicitud individual en virtud del artículo 34 del CEDH como la solicitud de medidas cautelares del artículo 39 del Reglamento. A tal efecto, es relevante, de modo paralelo a la solicitud de medidas cautelares, que la solicitud de asilo a nivel nacional esté debidamente fundamentada desde el primer momento<sup>125</sup>.

### **3. El procedimiento a seguir por el TEDH**

Cuando se presente la solicitud de medida cautelar, el Tribunal procederá a su examen, con la máxima celeridad posible, en función de la consideración otorgada al carácter inminente de la expulsión de la persona. Puede ocurrir que, en determinados casos, la comunicación entre el solicitante y su abogado resulte complicada por hallarse el solicitante detenido, por ejemplo. En estos supuestos, se debe indicar dicho extremo en la solicitud de medida provisional y solicitar al Tribunal que invite al Gobierno a posibilitar dicha comunicación<sup>126</sup>. La solicitud de una medida cautelar es analizada de forma individual mediante un procedimiento escrito y contra la denegación de la misma no podrá interponerse recurso alguno, aunque los solicitantes tendrán la posibilidad de presentar una nueva solicitud en el supuesto de que aparezcan nuevos elementos. La decisión del Tribunal de otorgar o no las medidas provisionales de conformidad con el artículo 39 del Reglamento es discrecional y será comunicada mediante carta a los solicitantes o sus representantes sin especificar las razones en virtud de las cuales se ha fundamentado dicha decisión.

Respecto de la duración de las medidas cautelares, el Tribunal puede determinar que se apliquen por tiempo indefinido, por ejemplo, hasta la terminación del procedimiento, salvo que aparezcan nuevos hechos que obliguen a la suspensión de las medidas adoptadas, o, por el contrario, aplicar las medidas con una limitación temporal, verbigracia, hasta una fecha concreta, transcurrida la cual el Tribunal apreciará la conveniencia de la prórroga de las medidas. Esta prórroga podrá realizarse a instancia

---

<sup>125</sup> Decisión de admisibilidad del TEDH (Sección 4ª) de 16 de marzo de 2004. *Asunto Nasimi c. Suecia*, demanda no. 38865/02.

<sup>126</sup> STEDH (Sección 1ª) de 27 de marzo de 2008. *Asunto Shtukaturon c. Rusia*, demanda no. 44009/05, par. 33.

del propio Tribunal o del solicitante o, en su caso, su representante<sup>127</sup>. En esta misma línea, el Tribunal podrá proceder al levantamiento de las medidas cautelares adoptadas de conformidad con el artículo 39 del Reglamento si estima que el solicitante ya no corre el riesgo inminente de daño grave o si dicho levantamiento es solicitado por el propio demandante o el Gobierno, si considera que dispone de elementos probatorios que pueden incitar al Tribunal a proceder al levantamiento de las medidas cautelares<sup>128</sup>.

#### **4. Acerca de la obligatoriedad de las medidas provisionales**

Las medidas cautelares individuales que se adoptan de acuerdo con el artículo 39 del Reglamento son vinculantes mientras que se hallen en vigor<sup>129</sup>. Sin embargo, la cuestión relativa al cumplimiento de las medidas cautelares ha sido una cuestión controvertida, como se colige de la práctica de la Comisión y de la jurisprudencia del TEDH. Así pues, en el asunto *Cruz Varas y otros c. Suecia*, el presidente de la Comisión indicó a las autoridades suecas que suspendieran el procedimiento de expulsión del ciudadano chileno Cruz Varas. Sin embargo, las autoridades suecas no cumplieron dicha indicación y la Comisión, en su informe de 7 de junio de 1990<sup>130</sup>, consideró que el incumplimiento de la indicación de medidas cautelares suponía una violación del derecho del recurso individual ante ella o, dicho de otro modo, el cumplimiento de las medidas provisionales era obligatorio, inspirándose así en la teoría de superioridad del respeto a los derechos humanos sobre la soberanía de los países<sup>131</sup>.

---

<sup>127</sup> STEDH (Gran Sala) de 8 de abril de 2015. *Asunto W.H. c. Suecia*, demanda no. 49341/10, pars. 4-5. En dicho asunto, el Tribunal acordó la suspensión de la expulsión de la demandante como medida cautelar de conformidad con el artículo 39 del Reglamento del TEDH, indicándose al gobierno sueco que la demandante no podía ser expulsada a Irak antes de la terminación del procedimiento ante el Tribunal de Estrasburgo. Esta medida provisional fue levantada cuando en octubre de 2014 se concedió a la demandante - quien esgrimió el riesgo de padecer malos tratos por su condición de mujer perteneciente a una minoría étnica/religiosa en el supuesto de ser expulsada a Irak - el permiso de residencia permanente en territorio sueco. En consecuencia, la demandante desistió de su demanda ante el TEDH, procediéndose al archivo de las actuaciones. *Vid.* también STEDH (Sección 5ª) de 2 de septiembre de 2010. *Asunto Y.P. y L.P. c. Francia*, demanda no. 32476/06, par. 4; *F.G. c. Suecia*, *op. cit.*, par. 4.

<sup>128</sup> *Paladi c. Moldavia*, *op. cit.*, par. 90.

<sup>129</sup> ACNUR. *Guía relativa a la solicitud de medidas provisionales en virtud de la regla 39 del Reglamento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para personas en necesidad de protección internacional*, *op.cit.*, p. 17.

<sup>130</sup> *Cruz Varas y otros c. Suecia*, *op. cit.*, par. 66.

<sup>131</sup> PASTOR RIDRUEJO, J.A. *La reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: temas escogidos*. Madrid, junio de 2007. Disponible en la siguiente dirección electrónica: [http://www.ehu.eus/cursosderechointernacionalvitoria/ponencias/pdf/2007/2007\\_8.pdf](http://www.ehu.eus/cursosderechointernacionalvitoria/ponencias/pdf/2007/2007_8.pdf), p. 262.

En ese mismo caso, la opinión del Tribunal de Estrasburgo fue disidente al señalar que la obligatoriedad de dichas medidas no estaba establecida en el Derecho Internacional general de naturaleza consuetudinaria ni tampoco en los principios generales del Derecho<sup>132</sup>, otorgando, por ende, mayor credibilidad a la idea de soberanía de los Estados.

Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia más importante y reciente del TEDH en esta materia, puede afirmarse que las medidas cautelares que se adopten en virtud del meritado artículo 39 del Reglamento tienen carácter vinculante. En este sentido, cabe destacar la STEDH dictada en el caso *Mamatkulov y Askarov c. Turquía*<sup>133</sup> en la que el Tribunal concluyó, por seis votos contra uno, que la desobediencia de las autoridades turcas a la indicación de medidas cautelares en suspensión del procedimiento de extradición supuso una vulneración del precitado artículo 34 del CEDH. Por ende, la Sentencia referenciada *ut supra* hizo prevalecer la teoría de defensa de los derechos humanos sobre la de soberanía de los países<sup>134</sup>.

Igualmente, en la STEDH dictada en el caso *Olaechea Cahuas, c. España*<sup>135</sup>, el Tribunal manifestó la obligatoriedad de las medidas provisionales, condenando por unanimidad a España por no respetar las obligaciones dimanadas del artículo 34 del CEDH. En este caso, las autoridades españolas desobedecieron la indicación de medidas

---

<sup>132</sup> *Cruz Varas y otros c. Suecia, op. cit.*, par. 101: “Finally, no assistance can be derived from general principles of international law since, as observed by the Commission, the question whether interim measures indicated by international tribunals are binding is a controversial one and no uniform legal rule exists”

<sup>133</sup> *Mamatkulov y Askarov c. Turquía, op. cit.*, par. 110: “Por consiguiente, el Tribunal concluye que todo Estado parte en la Convención al que se haya presentado una petición de medidas provisionales indicadas para evitar que se cause a la víctima de la violación alegada un perjuicio irreparable, debe respetar estas medidas y abstenerse de todo acto u omisión que pudiese causar perjuicio a la integridad y efectividad de la sentencia final”.

<sup>134</sup> Sin embargo, este no fue el punto de vista del juez Turmen, elegido a petición de Turquía, que, en su opinión parcialmente disidente a la STEDH dictada en el asunto *Mamatkulov y Askarov c. Turquía*, manifestó que el sistema convencional presente no proporciona una base legal necesaria que permita afirmar el carácter vinculante de las medidas cautelares. En la misma línea, cabe hacer referencia al debate doctrinal existente en relación a la obligatoriedad de las medidas cautelares. Así pues, el autor Pastor Ridruejo opina que dichas medidas cautelares adoptadas por el TEDH no son “obligatorias desde el punto de vista jurídico”; *vid.* PASTOR RIDRUEJO, J.A. *La reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: temas escogidos, op. cit.*, par. 267.

<sup>135</sup> STEDH (Sección 5ª) de 10 de agosto de 2006. *Asunto Olaechea Cahuas, c. España*, demanda no. 24668/03, par. 72-74. También en *Aoulmi c. Francia, op. cit.*, par. 100. Fue precisamente en esta última STEDH cuando el Tribunal utilizó, por primera vez, el adjetivo “vinculante” en referencia a las medidas cautelares.

provisionales en suspensión de la extradición a Perú de un presunto miembro de una organización terrorista. Recientemente, en las Sentencias dictadas en el marco de los casos *Andrey Lavrov c. Rusia*<sup>136</sup>, de 1 de marzo de 2016 y *Yunusova y Yunusov c. Azerbaiyán*<sup>137</sup>, de 2 de junio de 2016, el Tribunal de Estrasburgo recordó el efecto jurídico vinculante para los países interesados de las medidas provisionales y la máxima importancia que se concede a la cuestión del cumplimiento de las mismas por los Estados parte. En esta línea, el Tribunal afirmó que la obligatoriedad de las medidas cautelares permiten al Estado afectado cumplir su obligación de acatar la Sentencia definitiva de la Corte<sup>138</sup>.

Pues bien, un país que no respeta las medidas provisionales acordadas por el Tribunal, incurre en una vulneración del derecho de petición establecido por el artículo 34 del CEDH, que obliga a las Partes a no dificultar el derecho de un solicitante de acceder al TEDH.

## **CAPÍTULO V**

### **ALTERNATIVAS A LA PERMANENCIA DEL NACIONAL DE UN TERCER PAÍS EN EL ESTADO MIEMBRO**

#### **1. La devolución a un Estado seguro**

Como se ha reiterado a lo largo del trabajo, no tiene cabida la expulsión de un extranjero al territorio de un país en el que exista un riesgo real de que la persona pueda ver peligrar su vida o sufrir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Ahora bien, ello no implica que, en tales circunstancias, el Estado miembro en cuestión esté obligado a conceder un derecho de estancia en su territorio, sino que existen alternativas. Una de ellas consiste en el traslado de la persona hacia un tercer

---

<sup>136</sup> STEDH (Sección 3ª) de 1 marzo de 2016. *Asunto Andrey Lavrov c. Rusia*, demanda no. 66252/14, pars. 32-33.

<sup>137</sup> STEDH (Sección 5ª) de 2 de junio de 2016. *Asunto Yunusova y Yunusov c. Azerbaiyán*, demanda no. 59620/14, par. 111. El carácter vinculante de las medidas provisionales también es declarado, entre otras, en las siguientes sentencias: STEDH (Sección 2ª) de 12 de abril de 2005. *Asunto Shamayev y otros c. Georgia y Rusia*, demanda no. 36378/02, par. 473; STEDH (Sección 1ª) de 27 de noviembre de 2014. *Asunto Amirov c. Rusia*, demanda no. 51857/13, par. 67; STEDH (Sección 1ª) de 5 de febrero de 2015. *Asunto Khloyev c. Rusia*, demanda no. 46404/13, par. 60.

<sup>138</sup> *Andrey Lavrov c. Rusia*, op. cit., par. 32.

Estado que sea considerado como *país seguro*. A estos efectos, resulta obligado definir qué debe entenderse por Estado seguro. Así pues, en el ámbito europeo, el artículo 36 de la Directiva 2013/32/UE<sup>139</sup> dispone que, un tercer país designado como Estado de origen seguro de conformidad con la Directiva, podrá ser considerado como país seguro para el solicitante si el mismo posee la nacionalidad de dicho Estado, o bien es apátrida y anteriormente tuvo su residencia habitual en dicho país, y no se ha constatado ningún motivo grave para dejar de ser considerado como un Estado seguro. La Directiva permite que sean los EEMM los que establezcan, en su derecho interno, las normas y los procedimientos para la designación de los países de origen que se consideran seguros, remitiendo dicha información a la Comisión. Para ello, los EEMM deberán seguir las pautas establecidas en el Anexo I de la Directiva, en cuya virtud, un país es un país de origen seguro cuando, en vista de la situación jurídica, la aplicación efectiva del Derecho dentro de un sistema democrático y las circunstancias políticas generales, pueda probarse “que de manera general y sistemática no existe persecución en la acepción del artículo 9 de la Directiva 2011/95/UE<sup>140</sup>, tortura o tratos o penas inhumanos o degradantes ni amenaza de violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno”. Se trata de un sistema de dudosa efectividad y ello, por cuanto, sería más lógico que hubiere una lista común a todos los EEMM de países de origen seguro y no quedar al criterio de las autoridades de cada Estado.

La Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de julio de 2016, por la que se establece una lista común a la UE de países de origen seguros incluye a: Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Kosovo, Serbia, Montenegro y Turquía. Sin embargo, el Comité Económico y Social Europeo en su Dictamen sobre la propuesta de Reglamento afirma que los indicadores utilizados en la misma no valoran de forma adecuada los criterios establecidos en el precitado Anexo I, dejando sin

---

<sup>139</sup> Unión Europea. Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (refundición), *op.cit.*

<sup>140</sup> Unión Europea. Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida. *DOUE*, L 337/9, de 20 de diciembre de 2011.

analizar cuestiones como la aplicación práctica del Derecho y el respeto efectivo de los derechos humanos, así como la inexistencia de persecución<sup>141</sup>. Por todo ello, la inclusión de algunos Estados en esa lista de países de origen seguros es del todo controvertida. Según el Comité Económico y Social Europeo, la propuesta de la Comisión para la inclusión de esos siete países en el listado de países seguros debería aludir a otros indicadores efectivos en aras de medir el grado de aplicación del Derecho y el cumplimiento de los derechos humanos, tales como las fuentes de información de que se sirve el TEDH en su reiterada doctrina jurisprudencial - el SEAE, la EASO, el ACNUR, el Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales pertinentes - para determinar la valoración de la situación del país de origen y el consiguiente riesgo en el supuesto de devolución.

A mayor abundamiento, es necesario significar que en virtud del artículo 38 de la Directiva mencionada *ut supra* los EEMM solamente podrán aplicar el concepto de tercer país seguro si las autoridades estatales tienen la certeza de que el solicitante de protección será tratado en el tercer país de conformidad con los principios más elementales en materia de derechos humanos. Igualmente, el artículo 39 de la misma Directiva dispone que únicamente podrá ser considerado tercer país seguro si: “a) ha ratificado la Convención de Ginebra sin restricciones geográficas y observa sus disposiciones; b) cuenta con un procedimiento de asilo prescrito por la ley, y c) ha ratificado el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y cumple sus disposiciones, incluidas las normas relativas al recurso efectivo”.

Podría decirse que, en virtud del Reglamento de Dublín, los EEMM tienen la facultad de trasladar a los solicitantes de asilo al Estado miembro de la UE responsable de resolver la solicitud de asilo. Sin embargo, el cumplimiento de este principio establecido por la Convención de Dublín ya no es preceptivo tras los pronunciamientos del TEDH. En efecto, el Tribunal de Estrasburgo en la Sentencia dictada en el caso

---

<sup>141</sup> Unión Europea. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece una lista común a la UE de países de origen seguros a efectos de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, y por el que se modifica la Directiva 2013/32/UE. *DOUE*, C 71/82, de 24 de febrero de 2016, par. 4.

M.S.S. contra Bélgica y Grecia<sup>142</sup>, condenó por primera vez a un Estado miembro por el reenvío de un solicitante de asilo a otro Estado miembro, en cumplimiento del Reglamento de Dublín. En este sentido, la Gran Sala del Tribunal determinó que los países demandados incurrieron en responsabilidad por vulneración del CEDH.

En el caso de Bélgica, el Tribunal consideró que ese país había violado el artículo 3 del CEDH al trasladar al demandante a otro Estado en que podría sufrir tratos contrarios al Convenio, en forma de condiciones de detención y acogida deplorables<sup>143</sup> y que, a partir de ahí, podría ser expulsado hacia un tercer Estado en el que, a su vez, podría sufrir igualmente tratos proscritos por el artículo 3 del Convenio. Por añadidura, el Tribunal manifestó que las autoridades belgas podrían haber decidido no transferir al demandante al país heleno, si estimaban que existían motivos acreditados para creer que ese país no examinaría de forma pormenorizada la solicitud del demandante, y que, en consecuencia, no respetaría el principio de *non refoulement*. En particular, se expuso que Bélgica podría haber hecho uso de la denominada *cláusula de soberanía*, dispuesta en el artículo 3.2 del Reglamento de Dublín II – actual artículo 17.1 del Reglamento de Dublín III -, en cuya virtud los EEMM pueden examinar cualquier solicitud de asilo presentada por un extranjero aunque no les corresponda, de conformidad con los criterios establecidos por el Sistema de Dublín.

En el caso de Grecia, el TEDH concluyó por unanimidad que se había vulnerado el artículo 13 del CEDH, en relación con el artículo 3 de la misma norma<sup>144</sup>. Dicha condena se fundamentó en los diversos informes del ACNUR, del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y de otras ONGs internacionales que dejaban constancia del deficiente sistema griego en la gestión de las solicitudes de asilo, de las condiciones de detención de los asilados<sup>145</sup> y que, en la práctica, las autoridades

---

<sup>142</sup> M.S.S. c. Bélgica, *op.cit.*

<sup>143</sup> *Ibíd.*, par. 230.

<sup>144</sup> *Ibíd.*, par. 321: “Visto lo precedente, las excepciones preliminares planteadas por el Gobierno griego (apartado 283) no pueden ser admitidas y el Tribunal declara una violación del artículo 13 del Convenio en relación con el artículo 3 debido a los defectos de las autoridades en el examen de la solicitud de asilo del demandante y del riesgo de éste de ser devuelto directa o indirectamente hacia su país de origen, sin un examen minucioso del fundamento de su solicitud y sin haber tenido acceso a un recurso efectivo”.

<sup>145</sup> También el TEDH en el marco de otros casos ha condenado al país heleno por vulneración del artículo 3 del CEDH debido a las deficientes condiciones de detención y de vida de los peticionarios de asilo en el



de ese Estado no garantizaban el principio de *non refoulement*. En concreto, estos informes acreditaban la falta de información por parte de las autoridades helenas a los solicitantes de asilo acerca del procedimiento a seguir, la excesiva dilación en el tiempo de la instrucción del procedimiento y la ausencia de motivación de algunas de las decisiones administrativas denegatorias de la solicitud de asilo<sup>146</sup>. En este punto, cabe significar que la crisis humanitaria generada por la oleada migratoria de personas llegadas a Europa en busca de protección y ayuda ha agravado todavía más la situación en Grecia. En este sentido, ACNUR ha denunciado en múltiples ocasiones las deficientes condiciones de los asentamientos de refugiados y migrantes en ese país<sup>147</sup>.

En definitiva, esta STEDH constituye la primera condena a un Estado miembro de la UE por la aplicación del Reglamento de Dublín II de un modo opuesto a las obligaciones establecidas por el CEDH y pone en tela de juicio algunos de los principios más elementales del Sistema de Dublín<sup>148</sup>. Así es, la Sentencia hace cuestionar, por un lado, la presunción de que todos los EEMM de la UE respetan el principio de *non refoulement*, consagrado en el artículo 33 de la Convención de Ginebra de 1951 y, por otro lado, el entendimiento de que todos los EEMM son países seguros para los nacionales de terceros Estados. El TEDH ha condenado de forma categórica, en esta y otras sentencias posteriores, las deficiencias en el procedimiento de asilo en Grecia. Un ejemplo de esta jurisprudencia reciente lo constituye la STEDH dictada en el

---

país. A título de ejemplo *vid.* STEDH (Sección 1ª) de 11 de junio de 2009. *Asunto S.D. c. Grecia*, demanda no. 53541/07, pars. 49-54, en que se consideró como trato inhumano o degradante la detención de un solicitante de asilo en una barraca prefabricada durante dos meses sin posibilidad de tener contacto con el exterior y sin sábanas propias ni productos de higiene; STEDH (Sección 1ª) de 26 de noviembre de 2009. *Asunto Tabesh c. Grecia*, demanda no. 8256/07, pars. 38-44 que, en términos análogos al caso mencionado *ut supra*, condenó a Grecia por las pésimas condiciones de detención del solicitante de asilo que estuvo retenido por un período de tres días en un local de la policía helena sin recibir una adecuada alimentación; STEDH (Sección 1ª) de 22 de julio de 2010. *Asunto A.A. c. Grecia*, demanda no. 12186/08, pars. 57-65, en que igualmente se condenó a Grecia por el trato inhumano o degradante infligido al demandante que estuvo interno durante tres meses en un lugar carente de las condiciones más básicas de higiene y limpieza.

<sup>146</sup> *M.S.S. c. Bélgica y Grecia*, *op. cit.*, pars. 258-262.

<sup>147</sup> *Vid.* Nota de prensa de ACNUR. ACNUR preocupado por las condiciones en los nuevos asentamientos de refugiados en Grecia, de 27 de mayo de 2016. Disponible en la siguiente dirección electrónica: <http://www.acnur.org/noticias/noticia/acnur-preocupado-por-las-condiciones-en-los-nuevos-asentamientos-de-refugiados-en-grecia/>

<sup>148</sup> DÍAZ CREGO, M. *El asunto M.S.S C. Bélgica y Grecia, de 21 de enero de 2011: ¿hacia un replanteamiento del sistema de Dublín tras la condena del TEDH?*. Pamplona: Aranzadi Instituciones, 2011, pp. 2-3.

marco del caso *Sharifi y otros c. Italia y Grecia*<sup>149</sup> en la cual se condenó a ambos países por idénticos motivos a los expuestos en la STEDH *M.S.S. c. Bélgica y Grecia*.

## **2. La denominada *internal flight solution* o alternativa de reubicación interna**

Otra alternativa a la devolución de una persona hacia un tercer Estado que sea considerado como *país seguro*, es la denominada *internal flight solution* o alternativa de reubicación interna. A tal efecto, el Estado miembro no incurriría en responsabilidad si la devolución se produce a una determinada zona dentro del país receptor considerada segura, en la que el afectado no esté expuesto al riesgo de sufrir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes<sup>150</sup>. En este sentido, los EEMM pueden apreciar que una persona que se halle en situación de riesgo en su país de origen pueda estar segura en una determinada región dentro de su país, y por ende, no necesitar protección internacional.

En el Derecho de la UE, la posibilidad de reubicación interna está establecida en el artículo 8 de la Directiva 2011/95/UE<sup>151</sup>; a tal efecto, los EEMM tendrán en cuenta, en el momento de examinar si existe un riesgo real para el solicitante de sufrir daños graves, las circunstancias generales reinantes en esa región del país, así como las circunstancias personales del solicitante en el momento de resolver la solicitud, en base a información exacta y actualizada de fuentes pertinentes como el ACNUR y el EASO. En el marco del CEDH, las proposiciones de reubicación interna propuestas por un Estado miembro deben pasar por un pormenorizado análisis que incluya desde el punto de retorno hasta el lugar de destino. A tal efecto, habrá de apreciarse si el punto de retorno es seguro, si existen puestos de bloqueo en el itinerario y, de igual modo, si la persona retornada podrá transitar con seguridad por algunas zonas en particular para

---

<sup>149</sup> STEDH (Sección 2ª) de 21 de octubre de 2014. *Asunto Sharifi y otros c. Italia y Grecia*, demanda no. 16643/09, pars. 210-243.

<sup>150</sup> STEDH (Sección 3ª) de 6 de marzo de 2001. *Asunto Hilal c. Reino Unido*, demanda no. 45276/99, pars. 67-68; *Chahal c. Reino Unido*, *op. cit.*, par. 98; *Salah Sheekh c. Países Bajos*, *op. cit.*, par. 142.

<sup>151</sup> Unión Europea. Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida, *op. cit.*

llegar al lugar de destino. De igual modo, se habrá de examinar las circunstancias individuales de cada persona<sup>152</sup>.

En efecto, se ha de valorar si resultaría excesivamente gravoso para la persona su reubicación en la zona propuesta. Para realizar este examen son factores trascendentes la edad, el sexo, la salud, así como la situación y las relaciones familiares, los vínculos políticos y sociales y su compatibilidad con estos y toda persecución pasada y sus efectos psicológicos<sup>153</sup>. En concreto, la ausencia de lazos étnicos o culturales puede conllevar el aislamiento de la persona e, incluso, el rechazo por parte de las comunidades donde este tipo de relaciones cercanas son un factor dominante de la vida cotidiana. Así pues, ciertos factores que de forma individual podrían no imposibilitar la reubicación puede que sí lo hagan si existe un cúmulo de factores<sup>154</sup>.

En las STEDH dictadas en el marco de los casos *D.N.M. c. Suecia*<sup>155</sup> y *S.A. c. Suecia*<sup>156</sup> el Tribunal concluyó que la expulsión de los demandantes a Irak no supondría una violación de los artículos 2 y 3 del CEDH ya que, aunque algunos elementos mostraban que la situación personal de los demandantes les expondría a un riesgo real para sus vidas y un riesgo de sufrir tratos inhumanos o degradantes en caso de ser devueltos – en concreto, los demandantes alegaban el riesgo de ser víctimas de un crimen de honor puesto que cada uno de ellos mantuvo una relación con una mujer reprobada por su familia – el TEDH consideró que los demandantes podrían razonablemente instalarse en otras regiones de Irak<sup>157</sup>.

---

<sup>152</sup> TEDH. *Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración*, 2014, pp. 84-85. Disponible en la siguiente dirección electrónica: [http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook\\_asylum\\_SPA.pdf](http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_asylum_SPA.pdf)

<sup>153</sup> STEDH (Sección 5ª) de 4 de junio de 2015. *Asunto J.K. y otros c. Suecia*, demanda no. 59166/12, par. 117.

<sup>154</sup> ACNUR. *Directrices sobre protección internacional: La “alternativa de huida interna o reubicación” en el contexto del artículo 1A (2) de la Convención de 1951 o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados*. HCR/GIP/03/04, de 23 de julio de 2003, p. 9.

<sup>155</sup> STEDH (Sección 5ª) de 27 de junio de 2013. *Asunto D.N.M. c. Suecia*, demanda no. 28379/11, pars. 54-60.

<sup>156</sup> STEDH (Sección 5ª) de 27 de junio de 2013. *Asunto S.A. c. Suecia*, demanda no. 66523/10, pars. 53-59.

<sup>157</sup> En el mismo sentido se pronunció el Tribunal de Estrasburgo en el caso *J.K. y otros c. Suecia*, *op. cit.*, pars. 48 y 54. Una familia de nacionalidad iraquí, presentó una solicitud de protección internacional en agosto de 2011 ante las autoridades suecas alegando haber sido víctimas de un intento de asesinato y persecuciones por parte de la banda terrorista Al Qaeda, que había terminado con la vida de su hija. El

Igualmente en el caso *Sufi y Elmi c. Reino Unido*<sup>158</sup>, el TEDH manifestó que el artículo 3 del CEDH no imposibilita a los EEMM confiar en la posibilidad de la reubicación interna, siempre y cuando la persona expulsada pueda viajar a la zona en cuestión y acceder y establecerse en ella, evitando de un modo seguro la exposición a un riesgo real de sufrir malos tratos<sup>159</sup>. Además, el Tribunal determinó que podía haber partes del sur y el centro de Somalia donde un repatriado no tendría por qué correr el riesgo de sufrir malos tratos por el mero hecho de constatarse una situación de violencia generalizada. En dicho asunto, se consideró que los repatriados se verían expuestos a un riesgo de sufrir tratos proscritos por el artículo 3 del CEDH si tuvieran que viajar o pasar por una zona controlada por el Al-Shabaab, a no ser que se pudiera acreditar que habían vivido poco tiempo antes en Somalia y, por ende, sabían de qué modo evitar captar la atención de Al-Shabaab. Ahora bien, en el caso de los solicitantes, el Tribunal concluyó que, en el supuesto de ser expulsados a Somalia, correrían el riesgo de sufrir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En el mismo sentido se pronunció el TEDH en la Sentencia dictada en el caso *Hilal c. Reino Unido*<sup>160</sup> al concluir que la expulsión del demandante a Tanzania violaría el artículo 3 del CEDH, pues supondría exponer al interesado a un riesgo real de ser sometido a torturas y tratos inhumanos o degradantes. Así pues, se rechazó el argumento esgrimido por las autoridades británicas según el cual el demandante – que

---

padre consideraba que dichas persecuciones se debían al hecho de que tenía un negocio en una base americana y sus clientes eran únicamente de esa nacionalidad. En noviembre de ese mismo año, las autoridades suecas denegaron su solicitud de protección al constatar que el padre dejó de colaborar con empresas americanas en el año 2008 y la familia siguió residiendo durante dos años más en Bagdad sin sufrir ningún tipo de persecución ni ser víctimas de amenazas; por ende, se consideró que no había motivo para conceder el asilo. Así las cosas, el TEDH, a la vista de los hechos expuestos, y teniendo en consideración el argumento esgrimido por el gobierno sueco de que existía una alternativa de reubicación interna en la región de Kurdistán, concluyó por mayoría, que la situación no era lo suficientemente grave como para apreciar que los demandantes correrían un riesgo real de ser sometidos a un trato contrario al artículo 3 del CEDH, en el supuesto de regresar a Irak. También en STEDH (Sección 5ª) de 3 de abril de 2014. *Asunto A.A.M. c. Suecia*, demanda no. 68519/10, pars. 67-75.

<sup>158</sup> *Sufi y Elmi c. Reino Unido*, op. cit., pars. 294-296.

<sup>159</sup> En el mismo sentido vid. STEDH (Sección 5ª) de 27 de junio de 2013. *Asunto M.Y.H. y otros c. Suecia*, demanda no. 50859/10, pars. 62-67. Ahora bien, en dicho asunto, el Tribunal concluyó que la reubicación de los demandantes, de religión cristiana, en la región de Kurdistán suponía una alternativa viable para las personas afectas al cristianismo que temen persecución o malos tratos en otras partes de Irak. En consecuencia, su expulsión a dicha región del país no comportaría una vulneración del artículo 3 del CEDH.

<sup>160</sup> *Hilal c. Reino Unido*, op. cit., pars. 33 y 34.

era miembro del Frente Cívico Unido, partido de la oposición y había sido arrestado por su participación política - podría instalarse en la parte continental de Tanzania, donde la situación en materia de derechos humanos era más próspera. El Tribunal manifestó la existencia de problemas endémicos en relación a los vínculos institucionales entre la policía de la parte continental de Tanzania y Zanzíbar, zona en la que el demandante corría el riesgo de sufrir tortura, por ello, existía la posibilidad de “extradición” entre el interior de Tanzania y Zanzíbar.

El concepto de alternativa de reubicación interna no aparece entre los criterios establecidos en el artículo 1 (A) 2 de la Convención de Ginebra de 1951<sup>161</sup>. La cuestión relativa a si el solicitante de asilo goza de una alternativa de huída interna o reubicación puede, no obstante, aparecer como una forma de la “determinación integral” de la condición de refugiado<sup>162</sup>. Pues bien, dicha posibilidad de reubicación interna solamente será dable en determinados supuestos, en especial cuando el origen de la persecución proviene de agentes no estatales<sup>163</sup>. Incluso en aquellos supuestos en que resulte oportuna dicha alternativa, su aplicabilidad dependerá de las circunstancias concurrentes en cada caso y de la proporcionalidad de la reubicación a otra región del Estado de origen.

---

<sup>161</sup> Cuyo tenor literal reza del siguiente modo: “A los efectos de la presente Convención, el término “refugiado” se aplicará a toda persona: 2) Que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1.º de enero de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. En los casos de personas que tengan más de una nacionalidad, se entenderá que la expresión “del país de su nacionalidad” se refiere a cualquiera de los países cuya nacionalidad posean; y no se considerará carente de la protección del país de su nacionalidad a la persona que, sin razón válida derivada de un fundado temor, no se haya acogido a la protección de uno de los países cuya nacionalidad posea”.

<sup>162</sup> ACNUR. *Directrices sobre protección internacional: La “alternativa de huída interna o reubicación” en el contexto del artículo 1A (2) de la Convención de 1951 o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados*, op. cit., pp. 12-13.

<sup>163</sup> Vid. *D.N.M. c. Suecia*, op. cit., pars. 5-11 y *S.A. c. Suecia*, op. cit., pars. 7-12. En dichos asuntos, los demandantes alegaron el riesgo de ser víctimas de un crimen de honor dado que cada uno de ellos mantuvo una relación con una mujer no consentida por la familia.

### 3. Las garantías diplomáticas

Las garantías diplomáticas son acuerdos políticos entre Estados para que los derechos de las personas que son expulsadas sean respetados, pero, en la medida en que dichas garantías no se disponen en un tratado internacional, no son exigibles desde el punto de vista jurídico<sup>164</sup>. El término de garantías diplomáticas se emplea en el contexto de traslado de una persona de un Estado a otro. Aunque, cabe reseñar que no existe un concepto unívoco pues difiere, en cierta manera, de los distintos procedimientos diplomáticos existentes en cada país<sup>165</sup>. No obstante lo expuesto, puede entenderse que las garantías diplomáticas suponen el compromiso del Estado receptor de que la persona trasladada será tratada con las condiciones establecidas por el país remitente. O, de forma más amplia, que la persona en cuestión será tratada de conformidad con las obligaciones de derechos humanos asumidas por los Estados según el Derecho Internacional<sup>166</sup>.

Con carácter general, las relaciones entre los Estados en relación a la extradición se han basado en el ofrecimiento de garantías diplomáticas. Con las mismas, se pretende el aseguramiento por parte del Estado requerido de que el Estado requirente respetará las disposiciones de los tratados sobre derechos humanos, así como la normativa internacional de extradición. Empero, no sólo se emplean las garantías diplomáticas en el ámbito de la extradición. También, se suele recurrir a las garantías de que la persona que va a ser expulsada no será víctima de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes en el contexto de los procesos de traslado, como la expulsión o deportación<sup>167</sup>. En este sentido, cabe traer a colación la STEDH en el caso *Aylor Davis c. Francia* en la que el Tribunal constató que las garantías ofrecidas por el país receptor,

---

<sup>164</sup> CONDE PÉREZ, E. TEDH- *Sentencia de 28.02.2008, Saadi c. Italia, 37201/06- Artículo 3 CEDH- prohibición de torturas y penas o tratos inhumanos o degradantes- terrorismo v. tortura, op.cit.*, p. 283.

<sup>165</sup> PAZO PINEDA, O.A. *Garantías diplomáticas y Constitución: El derecho fundamental a la vida en los procesos de extradición*, 2012. Disponible en la siguiente dirección electrónica: <http://ius360.com/publico/constitucional/garantias-diplomaticas-y-constitucion-el-derecho-fundamental-a-la-vida-en-los-procesos-de-extradicion/>

<sup>166</sup> ACNUR. *Sección de Operaciones de Protección y Asesoría Legal. División de Servicios de Protección Internacional. Nota del ACNUR sobre las garantías diplomáticas y la protección internacional de los refugiados, op. cit.*, p. 2.

<sup>167</sup> *Ibidem*, pp. 2 y 3. *Vid*, STEDH (Gran Sala) de 13 de diciembre de 2012. *Asunto El-Masri c. ex-República Yugoslava de Macedonia*, demanda no. 39630/09, par. 171.

EEUU, en virtud de las cuales el Sr. Davis no sería ejecutado, se consideraban suficientes para eliminar el riesgo de que el demandante fuera condenado a pena capital. En consecuencia, el estado francés, como Estado remitente, no habría quebrantado la prohibición de imponer pena de muerte<sup>168</sup>.

La efectividad de las garantías diplomáticas en su papel de protección de la integridad física de las personas sometidas a procesos de extradición o deportación ha sido analizada con exhaustividad por diversos órganos internacionales de control de los derechos humanos, sobre todo tras la STEDH en el caso *Chahal c. Reino Unido*. Un ejemplo claro de los problemas que suscitan en la práctica la aplicación de las garantías diplomáticas es la STEDH dictada en el caso *Othman (Abu Qatada) c. Reino Unido*<sup>169</sup>. El asunto tiene su origen en la demanda dirigida contra el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la que un ciudadano jordano, Sr. Omar Othman recurre al Tribunal el 11 de febrero de 2009 en virtud del Artículo 34 del CEDH. En particular, el demandante alegó que su expulsión a Jordania lo expondría a un riesgo real de malos tratos, lo que supondría una violación del artículo 3 del CEDH. El demandante había sido reconocido como refugiado en Reino Unido en el año 1994. No obstante, durante su estancia en dicho país fue condenado en rebeldía en Jordania, a cadena perpetua, por su implicación en delitos relacionados con terrorismo. A raíz de la condena del demandante en este juicio, Jordania requirió su extradición al Reino Unido. El Sr. Othman manifestó ante las autoridades británicas que su deportación a Jordania podría conllevar una violación de los artículos 2, 3, 5 y 6 del CEDH, y ello pese a las garantías ofrecidas por el Estado requirente. En efecto, el 10 de agosto de 2005 Jordania y Reino Unido firmaron un Memorándum de Acuerdo en el que se definieron un conjunto de garantías de respeto a la normativa internacional en materia de derechos humanos en el supuesto de devolución de una persona de un país a otro<sup>170</sup>. Así, el TEDH examinó en dicha Sentencia los requisitos necesarios para considerar la validez de las garantías ofrecidas por un país.

---

<sup>168</sup> Decisión sobre admisibilidad del TEDH (Gran Sala) de 20 de enero de 1994. *Asunto Aylor Davis c. Francia*, demanda no. 22742/93.

<sup>169</sup> *Othman (Abu Qatada) c. Reino Unido*, op. cit.

<sup>170</sup> *Ibidem*, par. 23.

Uno de los criterios fundamentales a tener en cuenta para apreciar la suficiencia de las garantías ofrecidas por un Estado es que el órgano de control disponga de la documentación acreditativa de los compromisos asumidos por el país receptor<sup>171</sup>. A tal efecto, no sería suficiente con que el Tribunal hubiera tenido conocimiento de dicha documentación de forma indirecta, v. gr. el TEDH en el caso *Ryabikin c. Rusia* comprobó que no había recibido copia de una Carta esgrimida por el gobierno ruso en virtud de la cual el Fiscal General de Turkmenistán ofrecía garantías de que el demandante no sería objeto de malos tratos en el país<sup>172</sup>. En consecuencia, se consideró que la garantía no era suficiente. Este mismo hecho se constató en el caso *Muminov c. Rusia*<sup>173</sup>, aunque en dicho asunto las garantías procedían de las autoridades uzbekas.

Otro de los criterios a considerar para determinar la suficiencia de las garantías diplomáticas es la forma en que las garantías son ofrecidas, es decir, la terminología empleada, debiendo comprobarse si se trata de garantías claras y concretas o, de garantías ambiguas y genéricas. Pues bien, el TEDH constató en los casos *Klein c. Rusia*, en relación a las garantías ofrecidas por el Ministro de Asuntos Exteriores de Colombia<sup>174</sup> o *Khaydarov c. Rusia*<sup>175</sup>, en relación a las garantías ofrecidas por el Fiscal General de Tayikistán que no eran garantías suficientes por no asegurar una adecuada protección contra el riesgo de malos tratos, máxime teniendo en cuenta las prácticas adoptadas y toleradas por las autoridades de estos países que, habiendo sido denunciadas por numerosas fuentes fidedignas, vulnerarían los principios del CEDH.

---

<sup>171</sup> BOLLO AROCENA, M.D. *Expulsión de extranjeros, derecho internacional y derecho europeo*, op. cit., pp. 131-137.

<sup>172</sup> STEDH (Sección 1ª) de 19 de junio de 2008. *Asunto Ryabikin c. Rusia*, demanda no. 8320/04, par. 119; *Saadi c. Italia*, op.cit., pars. 147-148.

<sup>173</sup> STEDH (Sección 5ª) de 11 de diciembre de 2008. *Asunto Muminov c. Rusia*, demanda no. 42502/06, par. 97.

<sup>174</sup> STEDH (Sección 1ª) de 1 de abril de 2010. *Asunto Klein c. Rusia*, demanda no. 24268/08, par. 55: “The Court notes that the Government invoked assurances from the Colombian Ministry of Foreign Affairs to the effect that the applicant would not be subjected to ill-treatment there (see paragraph 16 above). However, the Court observes that the assurances in question were rather vague and lacked precision; hence, it is bound to question their value. The Court also reiterates that diplomatic assurances are not in themselves sufficient to ensure adequate protection against the risk of ill-treatment where reliable sources have reported practices resorted to or tolerated by the authorities which are manifestly contrary to the principles of the Convention”.

<sup>175</sup> STEDH (Sección 1ª) de 20 de mayo de 2010. *Asunto Khaydarov c. Rusia*, demanda no. 21055/09, par. 111.



En la misma línea, en el marco del caso *Labsi c. Eslovaquia*<sup>176</sup> el TEDH constató que no constituían garantías las ofrecidas por el Ministro de Justicia de Argelia que se limitaban a afirmar que cualquier tipo de tortura o trato degradante estaban proscritos por la legislación argelina o que, el Comité Internacional de la Cruz Roja tendría la posibilidad de entrevistar en privado a las personas sometidas a un proceso de traslado. Por el contrario, en el caso *Rrapo c. Albania*<sup>177</sup> se consideraron por el Tribunal como específicas, claras e inequívocas las garantías ofrecidas vía nota diplomática por la Embajada de Estados Unidos en Tirana en la que se manifestaba que el Sr. Almir Rrapo no sería condenado a pena capital en el supuesto de ser entregado a EEUU.

En otro orden de cosas, no es baladí señalar que las garantías diplomáticas se suelen solicitar con carácter individual, lo que no es óbice a que, en situaciones especiales, se hayan incluido garantías diplomáticas de clausulado general sobre el trato a las personas deportadas en virtud de acuerdos bilaterales<sup>178</sup>. Sin embargo, como se ha afirmado, las garantías diplomáticas proporcionadas por el Estado receptor no son jurídicamente vinculantes. En general, no se suelen establecer mecanismos de ejecución ni tampoco existen recursos que pueda interponer el país remitente o el sujeto interesado, en los supuestos de incumplimiento, una vez ha sido trasladado al Estado receptor<sup>179</sup>. Por ello, uno de los criterios a tener en consideración para dirimir si las garantías diplomáticas comprometen al Estado y, en consecuencia, son suficientes es determinar la autoridad que las confiere. En este sentido, se debe significar que es del todo excepcional la incorporación de mecanismos de vigilancia. Así pues, en aquellos supuestos en que se incluyen medidas de supervisión, éstas suelen consistir en visitas

---

<sup>176</sup> STEDH (Sección 3ª) de 15 de mayo de 2012. *Asunto Labsi c. Eslovaquia*, demanda no. 33809/08, pars. 121-122.

<sup>177</sup> STEDH (Sección 4ª) de 25 de septiembre de 2012. *Asunto Rrapo c. Albania*, demanda no. 58555/10, par. 72.

<sup>178</sup> Véase el Memorando de Entendimiento que regula los compromisos referentes a personas específicas antes de deportación, firmado por el Reino Unido y Jordania el 10 de agosto de 2005. Se estableció un acuerdo similar entre el Reino Unido y Libia el 18 de octubre de 2005.

<sup>179</sup> ACNUR. *Sección de Operaciones de Protección y Asesoría Legal. División de Servicios de Protección Internacional. Nota del ACNUR sobre las garantías diplomáticas y la protección internacional de los refugiados*, op. cit., p. 3.

del personal diplomático o consular del país remitente, bien al acto del juicio, bien al centro de detención donde reside la persona afectada<sup>180</sup>.

En este orden de cosas, resulta de interés aludir a la paradigmática STEDH dictada en el caso *Soldatenko c. Reino Unido*<sup>181</sup> en la que la Corte observó que el Fiscal General Adjunto de Turkmenistán no estaba facultado para proporcionar garantías diplomáticas en nombre del Estado. En el mismo sentido, se pronuncia el TEDH en el caso *Trabelsi c. Italia*<sup>182</sup> o en el marco del asunto *Ben Khemais c. Italia*<sup>183</sup>, al afirmar que el Abogado General de la Dirección General de los Servicios Judiciales tunecino no era competente para proporcionar garantías diplomáticas en nombre del Estado. Por ende, en estos supuestos se desestimaron las garantías ofrecidas por las precitadas autoridades.

Igualmente, cabe poner de manifiesto que el Tribunal ha considerado que, en ocasiones, resultan exiguas las garantías ofrecidas por un Estado si existen serias dudas de que, en la práctica, las mismas vayan a ser respetadas por las autoridades locales (véase la STEDH dictada en el caso *Chahal c. Reino Unido*<sup>184</sup> en la que se constató por el Tribunal que, pese a la voluntad del gobierno indio en proporcionar una garantía adecuada de seguridad al Sr. Chahal, la violación de los derechos humanos por determinados miembros de las fuerzas de seguridad en Punjab y en otras áreas del país era un problema duradero y recalcitrante; por consiguiente, se desestimó la validez de las garantías proporcionadas por el Estado). Por otro lado, en el caso *Harkins y Edwards c. Reino Unido*<sup>185</sup> el Tribunal de Estrasburgo consideró suficientes las garantías proporcionadas por el gobierno de Estados Unidos, vía nota diplomática, la fiscalía de

---

<sup>180</sup> SÁNCHEZ LEGIDO, A. *Garantías diplomáticas, no devolución y prohibición de la tortura*, op. cit., pp. 26-27.

<sup>181</sup> STEDH (Sección 5ª) de 23 de octubre de 2008. *Asunto Soldatenko c. Reino Unido*, demanda no. 2440/07, par. 73: “The Court observes, however, that it is not at all established that the First Deputy Prosecutor General or the institution which he represented was empowered to provide such assurances on behalf of the State”.

<sup>182</sup> STEDH (Sección 2ª) de 13 de abril de 2010. *Asunto Trabelsi c. Italia*, demanda no. 50163/08, pars. 46 y 47.

<sup>183</sup> STEDH (Sección 2ª) de 24 de febrero de 2009. *Asunto Ben Khemais c. Italia*, demanda no. 246/07, par. 59.

<sup>184</sup> *Chahal c. Reino Unido*, op. cit., par. 105.

<sup>185</sup> STEDH (Sección 4ª) de 17 de enero de 2012. *Asunto Harkins y Edwards c. Reino Unido*, demandas nos. 9146/07 y 32650/07, pars. 83-86.

Florida y el juez Weatherby instructor del caso para eliminar cualquier riesgo de que los solicitantes fueran condenados a muerte en el supuesto de ser extraditados y condenados.

A mayor abundamiento, el TEDH ha valorado favorablemente el hecho de que los tribunales de los Estados requeridos se cercioren, con carácter previo a la expulsión de un individuo, de que las garantías diplomáticas ofrecidas por los países requirentes sean, en efecto, válidas y suficientes. Muestra de ello es la decisión del TEDH dictada en el caso *Murat Gasayev c. España*<sup>186</sup> en la cual se expone que los tribunales españoles condicionaron la extradición del Sr. Gasayev a Rusia a la obtención de ciertas garantías. A este respecto, se pudo constatar por el Tribunal de Estrasburgo que la Audiencia Nacional efectuó un completo y diligente examen de las garantías proporcionadas por las autoridades de la Federación Rusa antes de proceder a la extradición (en particular, mediante sus intervenciones de 25 de septiembre, 7 de noviembre y 26 y 28 de diciembre de 2007). Así pues, tras dicho control de validez, el TEDH constató la suficiencia de las garantías ofrecidas por Rusia de que el demandante no sería condenado a la pena capital, ni a cadena perpetua, ni sería sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. En consecuencia, se declaró la inadmisibilidad de la solicitud presentada por el demandante.

En última instancia, el TEDH también tiene en consideración otros criterios en aras de determinar si las garantías ofrecidas por los Estados son válidas. Pues bien, uno de estos criterios es determinar si el país de destino es o no parte del CEDH<sup>187</sup>. De igual modo, otro de los elementos a tener en cuenta consiste en analizar los informes emitidos por organizaciones independientes de defensa de los derechos humanos - como Human Rights Watch o Amnistía Internacional – en los que se constaten prácticas empleadas o toleradas por las autoridades de un país y que puedan ser consideradas como

---

<sup>186</sup> Decisión de admisibilidad del TEDH (Sección 3ª) de 17 de febrero de 2009. *Asunto Murat Gasayev c. España*, demanda no. 48514/06, par. 1.

<sup>187</sup> *Vid.* Decisión de admisibilidad del TEDH (Sección 4ª) de 14 de diciembre de 2010. *Asunto Chentiev e Ibragimov c. Eslovaquia*, demandas nos. 21022/08 y 51946/08.

manifiestamente contrarias a los principios del CEDH<sup>188</sup>. A ello hay que añadir que el TEDH también ha establecido como criterio fundamental para examinar la suficiencia de las garantías, la cooperación por parte de las autoridades estatales del Estado requirente con organismos internacionales.

Precisamente, en el asunto *Ben Khemais c. Italia*<sup>189</sup> se apreció por la Corte la renuencia de las autoridades tunecinas a cooperar con los organismos internacionales en aquellos supuestos en que se alegara la violación de algún derecho. Igualmente, en la Sentencia dictada en el caso *Koktysh c. Ucrania*<sup>190</sup>, el TEDH observó que, pese a las garantías ofrecidas por las autoridades bielorrusas, los informes internacionales sobre derechos humanos mostraban serios problemas en relación a la cooperación internacional de las autoridades de dicho país en materia de derechos humanos y en particular con respecto a la abolición de la pena de muerte.

Como corolario lógico a lo expuesto, se puede afirmar que la validez y suficiencia de las garantías diplomáticas ofrecidas por un Estado dependerán de las circunstancias concurrentes en cada supuesto. En cualquier caso, resulta cuando menos dudoso que un país que infringe las obligaciones internacionales asumidas en virtud de convenios internacionales que resultan jurídicamente vinculantes, respete unas garantías diplomáticas que, como se ha afirmado, no vinculan jurídicamente y su naturaleza es vaga e imprecisa<sup>191</sup>. A ello hay que apuntar igualmente que tanto al Estado requerido como al Estado requirente no les favorece en absoluto que, tras la devolución de una persona, se constate la violación de derechos humanos en el país de entrega, pues ello prueba la ineficacia de las garantías diplomáticas, así como la vulneración de las obligaciones asumidas por ambos países. Un ejemplo meridianamente claro en relación a lo expuesto es el caso de Ahmed Agiza y su pareja en el que, el Comité contra la Tortura descubrió que el gobierno sueco no reveló por completo un informe de

---

<sup>188</sup> STEDH (Sección 1ª) de 24 de abril de 2008. *Asunto Ismoilov c. Rusia*, demanda no. 2947/06, par. 127; *Ryabikin c. Rusia*, op.cit, par. 119; *Klein c. Rusia*, op. cit., par. 55; *Saadi c. Italia*, op.cit., par. 147; *Ben Khemais c. Italia*, op. cit., pars. 53-56.

<sup>189</sup> *Ben Khemais c. Italia*, op. cit., pars. 59 y 60. También en *Soldatenko c. Reino Unido*, op.cit, par. 73

<sup>190</sup> STEDH (Sección 5ª) de 10 de diciembre de 2009. *Asunto Koktysh c. Ucrania*, demanda no. 43707/07, par. 63.

<sup>191</sup> SÁNCHEZ LEGIDO, A. *Garantías diplomáticas, no devolución y prohibición de la tortura*, op. cit., p. 34.

seguimiento de enero de 2002, que contenía denuncias de Ahmed Agiza de que había sido golpeado y le habían infligido otros malos tratos bajo custodia egipcia, poco tiempo después de su entrega a este país por las autoridades suecas<sup>192</sup>. En consecuencia, el Comité, concluyó en el año 2005, que Ahmed Agiza corría un peligro real de ser expuesto a tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes en el momento en que fue entregado por las autoridades suecas a Egipto y que las garantías diplomáticas ofrecidas por ese Estado no ofrecían una suficiente salvaguardia contra ese patente riesgo de sufrir tortura.

---

<sup>192</sup> *Agiza vs. Suecia*, comunicación núm. 233/2003, CAT/C/34/D/233/2003, 20 de mayo de 2005, <http://www1.umn.edu/humanrts/cat/spanish/233-2003.html>.

## Conclusiones

El principio de *non refoulement* establecido en el artículo 33 del Convenio de Ginebra de 1951 se aplica a todos los refugiados con independencia de su reconocimiento oficial. Así pues, este derecho protege no sólo a quienes han sido reconocidos oficialmente como refugiados, sino también a aquellos solicitantes de asilo que se encuentran a la espera de su resolución. A este respecto, la petición de asilo puede haber sido presentada en el territorio del Estado, en la frontera e incluso en Alta mar, cuando el Estado ejerza una situación *de jure o de facto* de su jurisdicción. No tendría ningún sentido que un solicitante de asilo, cuya petición todavía no ha sido examinada, fuera devuelto al país en que esté expuesto al riesgo de ser perseguido.

El meritado Convenio de Ginebra de 1951 manifiesta que no podrán beneficiarse de la protección conferida por el *non refoulement* los refugiados que supongan un peligro o una amenaza para la seguridad del país en el que se encuentren. No obstante, este principio sobrepasa la esfera de protección de los refugiados y tiene actualmente sustento en otros instrumentos de Derecho Internacional como el CEDH, aunque de forma implícita. Así lo ha reconocido a lo largo de su reiterada jurisprudencia el TEDH. En este sentido, no tiene cabida la expulsión de un nacional de un tercer país al territorio de un Estado en el que exista un riesgo presente, real, previsible y personal de que el individuo concernido pueda ver peligrar su vida o sufrir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, por muy indeseables y peligrosas que sean las actividades de la persona en cuestión.

En efecto, el artículo 3 del CEDH que prohíbe la comisión de actos de tortura tiene carácter absoluto y, por ende, no puede justificarse la expulsión, por razones de seguridad nacional u orden público, si con la devolución pudiera exponerse a la persona a un riesgo real de sufrir tratos proscritos por el mentado precepto. Todo ello permite colegir la mayor protección conferida por el artículo 3 del CEDH que la prevista en el artículo 33 de la Convención de Ginebra. Partiendo de esta afirmación, podría producirse la circunstancia de que un refugiado pudiera ser expulsado en aplicación del precepto de la Convención de Ginebra y, en cambio, no poder procederse a la devolución si con la misma se expusiera a la persona a un peligro real de ser condenada

a muerte o sufrir actos de tortura o penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes en el país de destino.

Como decimos, la expulsión está terminantemente prohibida en el supuesto de que se constate un riesgo real y fundado de que la persona sometida al proceso de expulsión pudiera ser sometida a tratos proscritos por el artículo 3 del CEDH. A mayor abundamiento, esta regla se aplica con independencia de que el riesgo provenga del Estado o de agentes particulares, cuando el Estado no pueda ofrecer una protección adecuada a la persona afectada, siendo irrelevante los actos que la misma hubiera podido realizar. En este sentido, se infiere de la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo que no puede expulsarse a un individuo, inclusive bajo la presunción de haber cometido actos terroristas, si la expulsión expone a la persona al peligro de sufrir actos de tortura.

La decisión de proceder a expulsar a una persona aquejada de una grave enfermedad ha sido una cuestión, cuando menos, controvertida a lo largo de la jurisprudencia del TEDH. En este sentido, resulta de suma relevancia la opinión disidente emitida por los jueces Tulkens, Bonello y Spielmann en la Sentencia dictada en el marco del caso *N. c. Reino Unido*. En estos votos particulares se resaltó la flagrante contradicción entre la decisión adoptada en dicho asunto y el reiterado criterio jurisprudencial del TEDH en relación al carácter absoluto del artículo 3 del CEDH, del que se colegía el deber de no expulsar a ninguna persona a un Estado en el que corriera el riesgo de ser sometido a un trato contrario al, tantas veces citado, artículo 3. Estos votos disidentes fueron especialmente importantes por cuanto contribuyeron a la adopción por parte del Tribunal de Estrasburgo de una posición más flexible y garante, que se refleja en la reciente STEDH dictada en el caso *Paposhvili c. Bélgica*, en la que se concluyó que la expulsión del demandante, aquejado de una grave enfermedad, a Georgia supondría una violación del artículo 3.

Resulta de gran interés, por otro lado, la doctrina sentada por el Tribunal de Estrasburgo en la Sentencia dictada en el caso *Hirsi Jamaa y otros c. Italia*, pues en aplicación del Derecho Internacional general y del Derecho que rige en Alta mar, extendió las obligaciones que recaen sobre los Estados parte del CEDH a todas aquellas

zonas en que el Estado ejerce jurisdicción. De ese modo, las expulsiones de nacionales de terceros Estados llevadas a cabo en el marco de intercepciones en Alta mar por parte de las autoridades de un país y que tienen como objetivo impedir a los inmigrantes la llegada a las fronteras de ese Estado, constituye un ejercicio de su jurisdicción y, por consiguiente, entraña la responsabilidad del Estado en el sentido del artículo 4 del Protocolo no. 4.

En otro orden de cosas, se ha de manifestar nuevamente la importancia del papel que desempeñan las medidas cautelares a la hora de evitar situaciones irreversibles que, de otro modo, impedirían al Tribunal analizar adecuadamente las solicitudes que ante él se presentan y, en todo caso, garantizar al demandante que pueda beneficiarse efectivamente de los derechos garantizados por el Convenio. Estas medidas provisionales son vinculantes y su incumplimiento constituye una violación del artículo 34 del CEDH que obliga a las partes a no obstar el derecho de un solicitante de acceder al Tribunal, tal y como ha manifestado la Corte en reiterados ocasiones. A título meramente ejemplificativo, véase la STEDH dictadas en el marco de los asuntos *Mamatkulov y Askarov c. Turquía* o *Andrey Lavrov c. Rusia*.

Conviene significar, en este punto, las alternativas de que disponen los Estados miembros en relación a la permanencia de los nacionales de terceros países en sus territorios. A este respecto, se ha afirmado que no plantea problemas la expulsión de una persona hacia un tercer Estado que sea considerado país seguro, como tampoco lo plantea, *prima facie*, la posibilidad de reubicación interna. En este sentido, el Estado miembro no incurriría en responsabilidad si la devolución se produce a una determinada zona dentro del Estado receptor considerada segura, en la que el afectado no corra el riesgo de sufrir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, siempre que se hayan valorado adecuadamente las circunstancias individuales de la persona concernida. Sin embargo, la responsabilidad del Estado miembro sí podría darse en los casos de devolución indirecta, con motivo de la expulsión de una persona a un Estado en el que no exista el riesgo de sufrir tratos proscritos por el artículo 3 del Convenio, pero sí del reenvío del afectado a un tercer país en el que exista dicho peligro.



Igualmente cuestionable es la práctica estatal consistente en condicionar la expulsión de una persona a la previa obtención de garantías diplomáticas por parte del Estado requerido de que el Estado requirente respetará las disposiciones de los tratados en materia de derechos humanos y, en consecuencia, la persona expulsada no será víctima de actos de tortura, ni se le aplicará la pena de muerte. La efectividad de estas garantías, en su papel de protección de la integridad física de las personas sometidas a procesos de expulsión, ha sido analizada en numerosos supuestos por el Tribunal de Estrasburgo, teniendo en cuenta criterios como los siguientes: la disponibilidad de la documentación acreditativa de los compromisos asumidos por el Estado requirente, la claridad y suficiencia de los términos en que se redactan las garantías, la autoridad que las confiere y, por ende, la capacidad para obligar al Estado o si el país de destino es o no parte del CEDH. De esos criterios establecidos por la doctrina jurisprudencial del TEDH se colige que, en función de las circunstancias del caso concreto, la garantía otorgada por un país será o no válida. En este punto, no podemos más que manifestar nuestra posición de rechazo a esta práctica entre Estados cuya única razón de ser, a nuestro juicio, es eludir el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, máxime teniendo en cuenta el carácter no vinculante y la naturaleza difusa de estos acuerdos.

Los Estados tienen derecho a controlar los flujos migratorios, así como a regular las condiciones de entrada, permanencia y salida de los nacionales de un tercer país en su territorio nacional. Ahora bien, las políticas de los Estados miembros del Consejo de Europa, en cuestión de inmigración, no pueden eludir los parámetros establecidos por el TEDH en aplicación de las normas de Derecho Internacional, pues constituyen un límite infranqueable. Estos parámetros deben operar no sólo cuando el proceso de traslado tiene lugar dentro del territorio soberano del país, sino también en aquellas situaciones en que el Estado ejerza un control efectivo sobre las personas concernidas.

## Bibliografía

### Libros y artículos en revistas especializadas

- BOLLO AROCENA, M.D. *Límites personales y materiales al derecho de los estados a la expulsión de extranjeros. Una visión desde el derecho internacional público*. Vitoria-Gasteiz: Dialnet, 2012. Disponible en la siguiente dirección electrónica: [http://www.ehu.eus/cursosderechointernacionalvitoria/ponencias/pdf/2012/2012\\_2.pdf](http://www.ehu.eus/cursosderechointernacionalvitoria/ponencias/pdf/2012/2012_2.pdf)
- BOLLO AROCENA, M.D. *Expulsión de extranjeros, derecho internacional y derecho europeo*. Madrid: Aranzadi Instituciones, 2017
- CONDE PÉREZ, E. TEDH- *Sentencia de 28.02.2008, Saadi c. Italia, 37201/06- Artículo 3 CEDH- prohibición de torturas y penas o tratos inhumanos o degradantes- terrorismo v. tortura*. Madrid: Revista de Derecho Comunitario Europeo, 2009
- DE CASTRO SÁNCHEZ, C. TEDH – *Sentencia de 23.02.2012 (Gran Sala), Hirsi Jamaa E.A. c. Italia, 27765/09 – “Artículo 3 y 13 del CEDH; Artículo 4 del Protocolo nº 4 – tortura y tratos inhumanos y degradantes – derecho a un recurso efectivo – prohibición de las expulsiones colectivas de extranjeros”*. *El CEDH como límite de las políticas migratorias europeas*. Revista de Derecho Comunitario Europeo, ISSN 1138-4026, año nº 17, nº 46, 2013
- DÍAZ CREGO, M. *El asunto M.S.S C. Bélgica y Grecia, de 21 de enero de 2011: ¿hacia un replanteamiento del sistema de Dublín tras la condena del TEDH?*. Pamplona: Aranzadi Instituciones, 2011
- GARCÉS-MASCAREÑAS, B. *Por qué Dublín “no funciona”*. Barcelona: CIDOB, 2015
- HATHAWAY, J.C., *The Rights of Refugees under International Law*, Cambridge University Press, 2005

- MARIÑO MENÉNDEZ, F. *El derecho internacional y europeo y la protección de los refugiados*. Madrid: Aranzadi Instituciones, 2012
- MARIÑO MENÉNDEZ, F. *El asilo en el Derecho de la Unión Europea*. Madrid: Aranzadi Instituciones, 2017
- MAURO, M.R. *El Sistema Europeo común de asilo y refugio, a debate*. Madrid: Aranzadi Instituciones, 2016
- OLESTI RAYO, A. *El Espacio Schengen y la reinstauración de los controles en las fronteras interiores de los Estados miembros de la Unión Europea*. REAF, nº 15, 2012
- PASTOR RIDRUEJO, J.A. *La reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: temas escogidos*. Madrid, junio de 2007. Disponible en la siguiente dirección electrónica: [http://www.ehu.eus/cursosderechointernacionalvitoria/ponencias/pdf/2007/2007\\_8.pdf](http://www.ehu.eus/cursosderechointernacionalvitoria/ponencias/pdf/2007/2007_8.pdf)
- PAZO PINEDA, O.A. *Garantías diplomáticas y Constitución: El derecho fundamental a la vida en los procesos de extradición*, 2012. Disponible en la siguiente dirección electrónica: <http://ius360.com/publico/constitucional/garantias-diplomaticas-y-constitucion-el-derecho-fundamental-a-la-vida-en-los-procesos-de-extradicion/>
- SALINAS DE FRÍAS, A. *Detención, garantías esenciales y Estado de derecho en la jurisprudencia del TEDH*. Disponible en la siguiente dirección electrónica: [revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/viewFile/9137/8730](http://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/viewFile/9137/8730)
- SÁNCHEZ LEGIDO, A. *Garantías diplomáticas, no devolución y prohibición de la tortura*. Disponible en la siguiente dirección electrónica: [https://previa.uclm.es/profesorado/asanchez/webdih/.../REDI-Garantías\\_txt.doc](https://previa.uclm.es/profesorado/asanchez/webdih/.../REDI-Garantías_txt.doc)
- WOUTERS, C.K. *International Legal Standards for the Protection from Refoulement: a legal analysis of the prohibitions on refoulement contained in the*

*Refugee Convention, the European Convention on Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention against Torture*, Antwerpen: Intersentia, 2009, p. 115. Disponible en la siguiente dirección electrónica: <https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/13756/000-wouters-B-25-022009.pdf?sequence=2>

#### Legislación internacional

- Naciones Unidas. *Declaración Universal de Derechos Humanos*, París, 10 de diciembre de 1948, Resolución 217 A (III)
- Naciones Unidas. *Declaración sobre el Asilo Territorial*, de 14 de diciembre de 1967, AG. Resolución 2132 (XXII)
- Naciones Unidas. *Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes*, Nueva York, 10 de diciembre de 1984, AG. Resolución 39/46
- Naciones Unidas. Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado. Nota sobre protección Internacional, 13 de septiembre de 2001, A/AC.96/951

#### Legislación regional

- Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, 26 de noviembre de 1987, ETS nº. 126
- Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, Roma, 4 de noviembre de 1950.
- Protocolo número 6 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, relativo a la abolición de la pena de muerte, Estrasburgo, 28 de abril de 1983, ETS nº. 114
- Protocolo número 13 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias, Vilnius, 3 de mayo de 2002, ETS nº. 187

- Reglamento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 14 de noviembre de 2016
- Unión Europea. Reglamento nº 343/2003 del Consejo de la Unión Europea de 18 de febrero de 2003 por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los estados miembros por un nacional de un tercer país. *DOUE*, de 25 de febrero de 2003
- Unión Europea. Reglamento nº 1560/2003 de la Comisión de 2 de septiembre de 2003 por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no. 343/2003 del Consejo por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país. *DOUE*, L 222/3, de 5 de septiembre de 2003
- Unión Europea. Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida. *DOUE*, L 337/9, de 20 de diciembre de 2011
- Unión Europea. Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (refundición). *DOUE*, L 180/60, de 29 de junio de 2013
- Unión Europea. Reglamento (UE) No 656/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 por el que se establecen normas para la vigilancia de las fronteras marítimas exteriores en el marco de la cooperación operativa coordinada por la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea. *DOUE*, L 189/93, de 27 de junio de 2014

- Unión Europea. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece una lista común a la UE de países de origen seguros a efectos de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, y por el que se modifica la Directiva 2013/32/UE. *DOUE*, C 71/82, de 24 de febrero de 2016

### Informes de Instituciones

- ACNUR. *Directrices sobre protección internacional: La “alternativa de huida interna o reubicación” en el contexto del artículo 1A (2) de la Convención de 1951 o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados*. HCR/GIP/03/04, de 23 de julio de 2003
- ACNUR. *Sección de Operaciones de Protección y Asesoría Legal. División de Servicios de Protección Internacional. Nota del ACNUR sobre las garantías diplomáticas y la protección internacional de los refugiados*. Ginebra, agosto de 2006. Disponible en la siguiente dirección electrónica: [www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7130.pdf?view=1](http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7130.pdf?view=1)
- ACNUR. *Guía relativa a la solicitud de medidas provisionales en virtud de la regla 39 del Reglamento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para personas en necesidad de protección internacional*, julio de 2007. Disponible en la siguiente dirección electrónica: [www.acnur.es/PDF/guia\\_regla39\\_espanol\\_20120720094755.pdf](http://www.acnur.es/PDF/guia_regla39_espanol_20120720094755.pdf)
- ACNUR. *Sentencia histórica del Tribunal de Estrasburgo sobre las devoluciones en el Mediterráneo*, 23 de febrero de 2012. Disponible en la siguiente dirección electrónica: <http://www.acnur.org/noticias/noticia/sentencia-historica-del-tribunal-de-estrasburgo-sobre-las-devoluciones-en-el-mediterraneo/>
- ACNUR. *Tendencias globales: desplazamiento forzado en 2016*, 19 de junio de 2017. Disponible en la siguiente dirección electrónica: <http://www.acnur.es/PDF/Tendencias2016.pdf>

- *Informe preliminar sobre la expulsión de extranjeros, del Sr. Maurice Kamto, Relator Especial, A/CN.4/554, 4 de abril de 2005*
- *Tercer informe sobre la expulsión de extranjeros, del Sr. Maurice Kamto, Relator Especial, A/CN.4/581, 19 de abril de 2007*

### Jurisprudencia

#### TEDH:

- STEDH (Gran Sala) de 25 de abril de 1978. *Asunto Tyrer c. Reino Unido*, demanda no. 5856/72
- STEDH (Gran Sala) de 26 de abril de 1985. *Asunto Malone c. Reino Unido*, demanda no. 8691/79
- STEDH (Gran Sala) de 7 de julio de 1989. *Asunto Soering c. Reino Unido*, demanda no. 14038/88
- STEDH (Gran Sala) de 20 de marzo de 1991. *Asunto Cruz Varas y otros c. Suecia*, demanda no. 15576/89
- STEDH (Gran Sala) de 30 de octubre de 1991. *Asunto Vilvarajah y otros c. Reino Unido*, demandas nos. 13163/87; 13164/87; 13165/87; 13447/87; 13448/87
- STEDH (Gran Sala) de 16 de diciembre de 1992. *Asunto Niemietz c. Alemania*, demanda no. 13710/88
- Decisión sobre admisibilidad del TEDH (Gran Sala) de 20 de enero de 1994. *Asunto Aylor Davis c. Francia*, demanda no. 22742/93
- STEDH (Gran Sala) de 7 de agosto de 1996. *Asunto C. c. Bélgica*, demanda no. 21794/93
- STEDH (Gran Sala) de 15 de noviembre de 1996. *Asunto Chahal c. Reino Unido*, demanda no. 22414/93

- STEDH (Gran Sala) de 17 de diciembre de 1996. *Asunto Ahmed c. Austria*, demanda no. 25964/94
- STEDH (Gran Sala) de 18 de diciembre de 1996. *Asunto Aksoy c. Turquía*, demanda no. 21987/93
- STEDH (Gran Sala) de 29 de abril de 1997. *Asunto H.L.R. c. Francia*, demanda no. 24573/94
- STEDH (Gran Sala) de 2 de mayo de 1997. *Asunto D. c. Reino Unido*, demanda no. 30240/96
- STEDH (Gran Sala) de 28 de octubre de 1998. *Asunto Assenov y otros c. Bulgaria*, demanda no. 24760/94
- STEDH (Gran Sala) de 29 de abril de 1999. *Asunto Aquilina c. Malta*, demanda no. 25642/94
- STEDH (Gran Sala) de 28 de julio de 1999. *Asunto Selmouni c. Francia*, demanda no. 25803/94
- STEDH (Gran Sala) de 16 de febrero de 2000. *Asunto Amann c. Suiza*, demanda no. 27798/95
- Decisión sobre admisibilidad del TEDH (Sección 3ª) de 7 de marzo de 2000. *Asunto T.I. c. Reino Unido*, demanda no. 43844/98
- STEDH (Gran Sala) de 6 de abril de 2000. *Asunto Labita c. Italia*, demanda no. 26772/95
- STEDH (Sección 4ª) de 11 de julio de 2000. *Asunto Jabari c. Turquía*, demanda no. 40035/98
- STEDH (Sección 1ª) de 27 de junio de 2000. *Asunto Nuutinen contra Finlandia*, demanda no. 32842/96



- Decisión sobre admisibilidad del TEDH (Sección 4ª) de 11 de enero de 2001. *Asunto Xhavara y otros c. Italia y Albania*, demanda no. 39473/98
- STEDH (Sección 3ª) de 6 de febrero de 2001. *Asunto Bensaid c. Reino Unido*, demanda no. 44599/98
- STEDH (Sección 3ª) de 6 de marzo de 2001. *Asunto Hilal c. Reino Unido*, demanda no. 45276/99
- STEDH (Sección 3ª) de 10 de julio de 2001. *Asunto Price c. Reino Unido*, demanda no. 33394/96
- STEDH (Sección 2ª) de 19 de abril de 2001. *Asunto Peers c. Grecia*, demanda no. 28524/95
- Decisión de admisibilidad del TEDH (Sección 1ª) de 3 de julio de 2001. *Asunto Nivette c. Francia*, demanda no. 44190/98
- STEDH (Sección 3ª) de 24 de julio de 2001. *Asunto Valašinas c. Lituania*, demanda no. 44558/98
- STEDH (Sección 2ª) de 2 de agosto de 2001. *Asunto Boultif c. Suiza*, demanda no. 54273/00
- Decisión sobre admisibilidad del TEDH (Sección 3ª) de 16 de octubre de 2001. *Asunto Einhorn c. Francia*, demanda no. 71555/01
- STEDH (Gran Sala) de 21 de noviembre de 2001. *Asunto Al-Adsani c. Reino Unido*, demanda no. 35763/97
- STEDH (Sección 4ª) de 29 de abril de 2002. *Asunto Pretty c. Reino Unido*, demanda no. 2346/02
- STEDH (Sección 1ª) de 11 de julio de 2002. *Asunto Amrollahi c. Dinamarca*, demanda no. 56811/00

- STEDH (Sección 1ª) de 25 de julio de 2002. *Asunto Papon c. Francia*, demanda no. 54210/00
- STEDH (Sección 3ª) de 10 de julio de 2003. *Asunto Benhebba c. Francia*, demanda no. 53441/99
- Decisión de admisibilidad del TEDH (Sección 4ª) de 16 de marzo de 2004. *Asunto Nasimi c. Suecia*, demanda no. 38865/02
- STEDH (Gran Sala) de 8 de julio de 2004. *Asunto Ilaşcu y otros c. Moldavia y Rusia*, demanda no. 48787/99
- Decisión de admisibilidad del TEDH (Sección 4ª) de 14 de septiembre de 2004. *Asunto V. Matsiukhina y A. Matsiukhin c. Suecia*, demanda no. 31260/04
- STEDH (Gran Sala) de 4 de febrero de 2005. *Asunto Mamatkulov y Askarov c. Turquía*, demandas nos. 46827/99 y 46951/99
- STEDH (Sección 2ª) de 12 de abril de 2005. *Asunto Shamayev y otros c. Georgia y Rusia*, demanda no. 36378/02
- STEDH (Gran Sala) de 12 de mayo de 2005. *Asunto Öcalan c. Turquía*, demanda no. 46221/99
- STEDH (Sección 4ª) de 26 de julio de 2005. *Asunto N. c. Finlandia*, demanda no. 38885/02
- STEDH (Sección 2ª) de 8 de noviembre de 2005. *Asunto Bader y Kanbor c. Suecia*, demanda no. 13284/04
- STEDH (Sección 4ª), de 17 de enero de 2006. *Asunto Aoulmi c. Francia*, demanda no. 50278/99
- STEDH (Sección 2ª) de 31 de enero de 2006. *Asunto Rodrigues Da Silva y Hoogkamer c. Países Bajos*, demanda no. 50435/99

- STEDH (Sección 3ª) de 8 de junio de 2006. *Asunto Lupsa c. Rumanía*, demanda no. 10337/04
- STEDH (Sección 5ª) de 10 de agosto de 2006. *Asunto Olachea Cahuas, c. España*, demanda no. 24668/03
- STEDH (Sección 1ª) de 12 de octubre de 2006. *Asunto Mubilanzila Mayeka y Kaniki Mitunga c. Bélgica*, demanda no. 13178/03
- STEDH (Gran Sala) de 18 de octubre de 2006. *Asunto Ünner c. Países Bajos*, demanda no. 46410/99
- STEDH (Sección 3ª) de 11 de enero de 2007. *Asunto Salah Sheekh c. Países Bajos*, demanda no. 1948/04
- STEDH (Sección 5ª) de 11 de enero de 2007. *Asunto Musa y otros c. Bulgaria*, demanda no. 61259/00
- Decisión sobre admisibilidad del TEDH (Sección 5ª) de 20 de febrero de 2007. *Asunto Al-Moayad c. Alemania*, demanda no. 35865/03
- Decisión sobre admisibilidad del TEDH (Sección 3ª) de 8 de marzo de 2007. *Asunto Collins y Akaziebie c. Suecia*, demanda no. 23944/05
- STEDH (Sección 2ª) de 26 de abril de 2007. *Asunto Gebremedhin [Gaberamadhien] c. Francia*, demanda no. 25389/05
- STEDH (Sección 1ª) de 6 de diciembre de 2007. *Asunto Liu c. Rusia*, demanda no. 42086/05
- STEDH (Sección 1ª) de 6 de diciembre de 2007. *Asunto Chair y J.B. c. Alemania*, demanda no. 69735/01
- STEDH (Gran Sala) de 28 de febrero de 2008. *Asunto Saadi c. Italia*, demanda no. 37201/06

- STEDH (Sección 1ª) de 27 de marzo de 2008. *Asunto Shtukaturon c. Rusia*, demanda no. 44009/05
- STEDH (Sección 1ª) de 24 de abril de 2008. *Asunto Ismoilov c. Rusia*, demanda no. 2947/06
- STEDH (Gran Sala) de 27 de mayo de 2008. *Asunto N. c. Reino Unido*, demanda no. 26565/05
- STEDH (Sección 4ª) de 27 de mayo de 2008. *Asunto Rodić y otros tres c. Bosnia y Herzegovina*, demanda no. 22893/05
- STEDH (Sección 1ª) de 19 de junio de 2008. *Asunto Ryabikin c. Rusia*, demanda no. 8320/04
- STEDH (Gran Sala) de 23 de junio de 2008. *Asunto Maslov c. Austria*, demanda no. 1638/03
- STEDH (Sección 5ª) de 23 de octubre de 2008. *Asunto Soldatenko c. Reino Unido*, demanda no. 2440/07
- STEDH (Sección 5ª) de 11 de diciembre de 2008. *Asunto Muminov c. Rusia*, demanda no. 42502/06
- STEDH (Sección 3ª) de 20 de enero de 2009. *Asunto F.H. c. Suecia*, demanda no. 32621/06
- Decisión de admisibilidad del TEDH (Sección 3ª) de 17 de febrero de 2009. *Asunto Murat Gasayev c. España*, demanda no. 48514/06
- STEDH (Sección 2ª) de 24 de febrero de 2009. *Asunto Ben Khemais c. Italia*, demanda no. 246/07
- STEDH (Gran Sala) de 10 de marzo de 2009. *Asunto Paladi c. Moldavia*, demanda no. 39806/05

- STEDH (Sección 2ª) de 5 de mayo de 2009. *Asunto Sellem c. Italia*, demanda no. 12584/09
- STEDH (Sección 1ª) de 11 de junio de 2009. *Asunto S.D. c. Grecia*, demanda no. 53541/07
- STEDH (Sección 4ª) de 24 de noviembre de 2009. *Asunto Omojudi c. Reino Unido*, demanda no. 1820/08
- STEDH (Sección 1ª) de 26 de noviembre de 2009. *Asunto Tabesh c. Grecia*, demanda no. 8256/07
- STEDH (Sección 5ª) de 3 de diciembre de 2009. *Asunto Daoudi c. Francia*, demanda no. 19576/08
- STEDH (Sección 5ª) de 10 de diciembre de 2009. *Asunto Koktysh c. Ucrania*, demanda no. 43707/07
- STEDH (Sección 4ª) de 2 de marzo de 2010. *Asunto Al-Saadoon y Mufdhi c. Reino Unido*, demanda no. 61498/08
- STEDH (Sección 3ª) de 9 de marzo de 2010. *Asunto R.C. c. Suecia*, demanda no. 41827/07
- STEDH (Sección 5ª) de 25 de marzo de 2010. *Asunto Mutlag c. Alemania*, demanda no. 40601/05
- STEDH (Gran Sala) de 29 de marzo de 2010. *Asunto Medvedyev y otros c. Francia*, demanda no. 3394/03
- STEDH (Sección 1ª) de 1 de abril de 2010. *Asunto Klein c. Rusia*, demanda no. 24268/08
- STEDH (Sección 2ª) de 13 de abril de 2010. *Asunto Trabelsi c. Italia*, demanda no. 50163/08

- STEDH (Sección 1ª) de 20 de mayo de 2010. *Asunto Khaydarov c. Rusia*, demanda no. 21055/09
- STEDH (Sección 1ª) de 10 de junio de 2010. *Asunto Garayev c. Azerbaiyán*, demanda no. 53688/08
- STEDH (Sección 3ª) de 20 de julio de 2010. *Asunto N. c. Suecia*, demanda no. 23505/09
- STEDH (Sección 3ª) de 20 de julio de 2010. *Asunto A. c. Holanda*, demanda no. 4900/06
- STEDH (Sección 1ª) de 22 de julio de 2010. *Asunto A.A. c. Grecia*, demanda no. 12186/08
- STEDH (Sección 5ª) de 2 de septiembre de 2010. *Asunto Y.P. y L.P. c. Francia*, demanda no. 32476/06
- STEDH (Sección 5ª) de 2 de septiembre de 2010. *Asunto Kaushal y otros c. Bulgaria*, demanda no. 1537/08
- Decisión de admisibilidad del TEDH (Sección 4ª) de 14 de diciembre de 2010. *Asunto Chentiev e Ibragimov c. Eslovaquia*, demandas nos. 21022/08 y 51946/08
- STEDH (Gran Sala) de 21 de enero de 2011. *Asunto M.S.S. c. Bélgica y Grecia*, demanda no. 30696/09
- STEDH (Sección 2ª) de 5 de abril de 2011. *Asunto Toumi c. Italia*, demanda no. 25716/09
- STEDH (Sección 4ª) de 28 de junio de 2011. *Asunto Nunez c. Noruega*, demanda no. 55597/09
- STEDH (Sección 4ª) de 28 de junio de 2011. *Asunto Sufi y Elmi c. Reino Unido*, demandas nos. 8319/07 y 11449/07

- STEDH (Sección 4ª) de 20 de septiembre de 2011. *Asunto A.A. c. Reino Unido*, demanda no. 8000/08
- STEDH (Sección 4ª) de 17 de enero de 2012. *Asunto Harkins y Edwards c. Reino Unido*, demandas nos. 9146/07 y 32650/07
- STEDH (Sección 4ª) de 17 de enero de 2012. *Asunto Othman (Abu Qatada) c. Reino Unido*, demanda no. 8139/09
- STEDH (Gran Sala) de 23 de febrero de 2012. *Asunto Hirsi Jamaa y otros c. Italia*, demanda no. 27765/09
- STEDH (Sección 4ª) de 10 de abril de 2012. *Asunto Babar Ahmad y otros c. Reino Unido*, demandas nos. 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 y 67354/09
- STEDH (Sección 4ª) de 10 de abril de 2012. *Asunto Balogun c. Reino Unido*, demanda no. 60286/09
- STEDH (Sección 3ª) de 15 de mayo de 2012. *Asunto Labsi c. Eslovaquia*, demanda no. 33809/08
- STEDH (Sección 5ª) de 15 de mayo de 2012. *Asunto Nacic y otros c. Suecia*, demanda no. 16567/10
- STEDH (Sección 5ª) de 15 de mayo de 2012. *Asunto S.F. y otros c. Suecia*, demanda no. 52077/10
- STEDH (Gran Sala) de 12 de septiembre de 2012. *Asunto Nada c. Suiza*, demanda no. 10593/08
- STEDH (Sección 4ª) de 25 de septiembre de 2012. *Asunto Rrapo c. Albania*, demanda no. 58555/10
- STEDH (Sección 2ª) de 2 de octubre de 2012. *Asunto Singh y otros c. Bélgica*, demanda no. 33210/11

- STEDH (Gran Sala) de 13 de diciembre de 2012. *Asunto de Souza Ribeiro c. Francia*, demanda no. 22689/07
- STEDH (Gran Sala) de 13 de diciembre de 2012. *Asunto El-Masri c. ex-República Yugoslava de Macedonia*, demanda no. 39630/09
- STEDH (Sección 4ª) de 29 de enero de 2013. *Asunto S.H.H. c. Reino Unido*, demanda no. 60367/10
- STEDH (Sección 5ª) de 6 de junio de 2013. *Asunto M.E. c. Francia*, demanda no. 50094/10
- STEDH (Sección 5ª) de 27 de junio de 2013. *Asunto S.A. c. Suecia*, demanda no. 66523/10
- STEDH (Sección 5ª) de 27 de junio de 2013. *Asunto D.N.M. c. Suecia*, demanda no. 28379/11
- STEDH (Sección 5ª) de 27 de junio de 2013. *Asunto M.Y.H. y otros c. Suecia*, demanda no. 50859/10
- STEDH (Sección 5ª) de 5 de septiembre de 2013. *Asunto I c. Suecia*, demanda no. 61204/09
- STEDH (Sección 5ª) de 19 de diciembre de 2013. *Asunto N.K. c. Francia*, demanda no. 7974/11
- STEDH (Sección 5ª) de 3 de abril de 2014. *Asunto A.A.M. c. Suecia*, demanda no. 68519/10
- STEDH (Sección 3ª) de 22 de abril de 2014. *Asunto A.C. y otros c. España*, demanda no. 6528/11
- STEDH (Sección 4ª) de 24 de julio de 2014. *Asunto Al Nashiri c. Polonia*, demanda no. 28761/11



- STEDH (Sección 2ª) de 21 de octubre de 2014. *Asunto Sharifi y otros c. Italia y Grecia*, demanda no. 16643/09
- STEDH (Sección 1ª) de 27 de noviembre de 2014. *Asunto Amirov c. Rusia*, demanda no. 51857/13
- STEDH (Sección 5ª) de 15 de enero de 2015. *Asunto A.A. c. Francia*, demanda no. 18039/11
- STEDH (Sección 5ª) de 15 de enero de 2015. *Asunto A.F. c. Francia*, demanda no. 80086/13
- STEDH (Sección 1ª) de 5 de febrero de 2015. *Asunto Khloyev c. Rusia*, demanda no. 46404/13
- STEDH (Gran Sala) de 8 de abril de 2015. *Asunto W.H. c. Suecia*, demanda no. 49341/10
- STEDH (Gran Sala) de 28 de septiembre de 2015. *Asunto Bouyid c. Bélgica*, demanda no. 23380/09
- STEDH (Gran Sala) de 23 de marzo de 2016. *Asunto F.G. c. Suecia*, demanda no. 43611/11
- STEDH (Sección 5ª) de 4 de junio de 2015. *Asunto J.K. y otros c. Suecia*, demanda no. 59166/12
- STEDH (Sección 3ª) de 1 marzo de 2016. *Asunto Andrey Lavrov c. Rusia*, demanda no. 66252/14
- STEDH (Sección 5ª) de 2 de junio de 2016. *Asunto Yunusova y Yunusov c. Azerbaiyán*, demanda no. 59620/14
- STEDH (Gran Sala) de 13 de diciembre de 2016. *Asunto Paposhvili c. Bélgica*, demanda no. 41738/10

- STEDH (Sección 3ª) de 14 de febrero de 2017. *Asunto S.K. c. Rusia*, demanda no. 52722/15
- STEDH (Sección 3ª) de 20 de junio de 2017. *Asunto M.O. c. Suiza*, demanda no. 41282/16

Otros tribunales:

- STPIY de 16 de noviembre de 1998. *Asunto Furundzija*, caso N° IT-95-17/1-T
- STJUE (Gran Sala) de 18 de diciembre de 2014. *Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve c. Moussa Abdida*, demanda no. C-562/13
- STJUE (Gran Sala) de 15 de febrero de 2016. *J. N. c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, demanda no. C-601/15